

14ª REUNIÓN — 9ª SESIÓN ORDINARIA — 8 DE AGOSTO DE 1984

Presidencia del señor presidente provisional del Honorable Senado,  
doctor **EDISON OTERO**, y del señor vicepresidente 1º  
del Honorable Senado, doctor **RAMÓN A. ARAUJO**

Secretario: doctor **ANTONIO J. MACRIS**

Prosecretarios: doctor **ALBERTO J. B. IRIBARNE** y señor **DESIDERIO LAUREANO ALMIRÓN**

---

SENADORES PRESENTES:

ALMENDRA, Ramón A.  
AMOEDO, Julio A.  
ARAUJO, Ramón A.  
BENÍTEZ, Alfredo L.  
BERHONGARAY, Antonio T.  
BITTEL, Deolindo F.  
BRASESCO, Luis A. J.  
BRAVO HERRERA, Horacio F.  
BRITOS, Oraldo N.  
CASTRO, Jorge A.  
CELLI, Felipe  
CONCHEZ, Pedro A.  
DE LA RUA, Fernando  
FALSONE, José A.  
FERIS, Gabriel  
GIL, Francisco  
GURDULICH de CORREA, Liliana I.  
LECONTE, Ricardo G.  
LEÓN, Luis A.  
MALHARRO de TORRES, Margarita  
MARINI Celestino A.  
MARTIARENA, José H.  
MATHUS ESCORIHUELA, Miguel A.  
MAZZUCCO, Faustino M.

MENEM, Eduardo  
MURGUÍA, Edgardo P. V.  
NAPOLI, Antonio O.  
NIEVES, Rogelio J.  
OTERO, Edison  
RIVAS, Olijela del Valle  
RODRIGUEZ SAA, Alberto J.  
SAADI, Vicente L.  
SÁNCHEZ, Libardo N.  
SAPAG, Elías  
SIGAL, Humberto C.  
SOLANA, Jorge D.  
TRILLA, Juan  
VELAZQUEZ, Héctor J.  
VILLADA, Francisco R.

AUSENTES, CON AVISO:

GASS, Adolfo  
LAFFERRIERE, Ricardo E.  
MAUHUM, Fernando H.  
SALIM, Luis  
VIDAL, Manuel D.  
WOODLEY, Kenneth W.

AUSENTES, EN COMISION:

GÓMEZ CENTURIÓN, Carlos E.

gencia de la ley 20.550 (jubilación especial para funcionarios del Poder Judicial). (Pág. 1162.)

- 2.—A moción del señor senador Conchez se resuelve girar también a la Comisión de Transportes el proyecto de ley del señor senador Saadi y otros señores senadores por el que se crea la Secretaría de Estado de Aviación Civil que tuvo entrada el 5 de julio del corriente año. (Pág. 1163.)
- 3.—A moción del señor senador Rodríguez Saá se resuelve girar a la Comisión de Asuntos Constitucionales con recomendación de pronto despacho el proyecto de ley que figura en el punto LXVII de los Asuntos Entrados. (Pág. 1163.)
- 4.—Consideración del dictamen de las comisiones de Obras Públicas, de Asistencia Social y Salud Pública y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de resolución del señor senador Nápoli por el que se solicita el cumplimiento de la ley 20.937 (nuevo edificio para el Hospital de San Carlos de Bariloche, provincia de Río Negro). Se aprueba. (Página 1164.)
- 5.—Consideración del dictamen de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Asuntos Administrativos y Municipales en el proyecto de comunicación de los señores senadores Rivas y Araujo por el que se solicita se adopten las medidas necesarias para la instalación de una delegación fija del Tribunal Fiscal de la Nación en la Ciudad de San Miguel de Tucumán. Se aprueba. (Pág. 1164.)
- 6.—Consideración del dictamen de las comisiones de Educación y de Obras Públicas en el proyecto de comunicación del señor senador Marini por el que se solicita la conclusión del edificio destinado al Centro Integral de Educación de la Nación, donde funcionará la Escuela Normal Superior Mariano Moreno, de San Cristóbal, provincia de Santa Fe. Se aprueba. (Pág. 1165.)
- 7.—Consideración del dictamen de la Comisión de Deportes en el proyecto de comunicación de los señores senadores Sánchez y Menem sobre promoción de la educación física, el deporte y la recreación en la provincia de La Rioja. Se aprueba. (Página 1166.)
- 8.—Consideración del dictamen de la Comisión de Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Mathus Escorihuela sobre instalación de una red de gas natural en Malargüe, provincia de Mendoza. Se aprueba. (Pág. 1167.)
- 9.—Consideración del dictamen de la Comisión de Combustibles en el proyecto de comunicación del señor senador Brasco sobre reapertura y habilitación de la planta de almacenamiento y fraccionamiento de gas licuado de petróleo de Bajada Grande, en Paraná, provincia de Entre Ríos. Se aprueba. (Página 1167.)
- 10.—Consideración del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores senadores de la Rúa, León y otros señores senadores sobre pro-

tección a los indígenas y apoyo a las comunidades aborígenes. Se aprueba con modificaciones. (Página 1168.)

- 11.—Pedido de pronto despacho del señor senador Velázquez para el proyecto de ley modificatorio de la ley 18.248 (régimen legal del nombre) que obra en la Comisión de Legislación General. (Pág. 1207).
- 12.—Moción de preferencia formulada por el señor senador Nápoli para tratar en la próxima reunión el proyecto de ley de defensa de la democracia y protección del orden constitucional, y moción del señor senador Saadi de pasar a cuarto intermedio. Se aprueba. (Pág. 1207.)
- 13.—Apéndice:
  - I.—Sanciones del Honorable Senado. (Pág. 1208.)
  - II.—Inserciones. (Pág. 1212.)

—En Buenos Aires, a las 20 y 22 del miércoles 8 de agosto de 1984.

Sr. Presidente (Otero). — Queda abierta la sesión.

# I

## ASUNTOS ENTRADOS

Sr. Presidente (Otero). — Por Secretaría se dará cuenta de los asuntos entrados.  
Sr. Secretario (Macris). — (Lee):

# I

## Comunicaciones de la Presidencia

Decreto del 6 de julio del corriente por el que se aprueba la comisión de servicios efectuada por el señor senador Antonio Nápoli a la república de Bolivia, entre los días 25 y 26 de mayo último. (A sus antecedentes.)

—Decreto del 10 de julio del corriente por el que se designa a los señores senadores Luis León y Francisco Villada para que, en representación del Honorable Senado, concurren a la reunión que efectuará la Comisión Especializada de la Deuda Externa en el marco del Parlamento Latinoamericano, en San José de Costa Rica, entre los días 18 y 23 de julio de 1984. (A sus antecedentes.)

—Decreto del 11 de julio de 1984 por el que se designa al señor senador Antonio Nápoli para que, en su carácter de presidente de la Comisión de Deportes del Senado de la Nación, concurre a los XXIII Juegos Olímpicos realizarse en Los Angeles, entre el 28 de julio y el 15 de agosto de 1984. (A sus antecedentes.)

—Decreto del 25 de julio del corriente por el que se expresa el beneplácito y la adhesión del Honorable Senado de la Nación ante la realización de la XVIII Conferencia Regional de la FAO para la América latina y el Caribe, en la ciudad de Buenos Aires, entre los días 6 al 15 de agosto de 1984. (A sus antecedentes.)

## Proyecto de comunicación

*El Senado de la Nación*

Vería con agrado que el Poder Ejecutivo, por el ministerio correspondiente, dispusiera la reapertura y habilitación de la planta de almacenamiento y fraccionamiento de gas licuado de petróleo de Bajada Grande, ubicada en la ciudad de Paraná, provincia de Entre Ríos, y que pertenece a la empresa Gas del Estado.

*Luis A. J. Brasesco.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

La reapertura y habilitación de la planta de almacenamiento y fraccionamiento de gas licuado de petróleo de Bajada Grande, ubicada en la ciudad de Paraná (Entre Ríos), es considerada en dicha provincia como un hecho trascendente que se vincula directamente con el desarrollo de la economía provincial.

Es de destacar que la planta referenciada se encuentra ubicada sobre la costa del río Paraná, en la zona portuaria de Bajada Grande, puerto de ultramar, donde tiene instalados sus muelles.

Las autoridades de Gas del Estado del "proceso" procedieron, cumpliendo las pautas del programa de desmantelamiento y destrucción económica de nuestra Nación, a clausurar la mencionada planta, sin explicación alguna.

La planta indicada puede entrar en funcionamiento en forma inmediata, previo trabajos necesarios a realizar, de costos menores, producto de la situación narrada y del mantenimiento no realizado, ya que se produjo un abandono total.

Por otra parte, el consumo de gas, el abaratamiento del producto y la concentración de mano de obra en la rehabilitación de una fuente de trabajo fundan con sobradas razones la reapertura y habilitación de la planta de almacenamiento y fraccionamiento de gas licuado de petróleo de Bajada Grande.

*Luis A. J. Brasesco.*

**Sr. Presidente (Otero).** — En consideración en general.

Si no se hace uso de la palabra, se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—En particular es igualmente afirmativa.

**Sr. Presidente (Otero).** — Queda aprobada la comunicación. Se procederá en consecuencia.

10

**PROTECCION DE INDIGENAS Y APOYO  
A LAS COMUNIDADES ABORIGENES**

**Sr. Presidente (Otero).** — Corresponde considerar el dictamen de las comisiones de Legis-

lación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley de los señores senadores de la Rúa, León y otros señores senadores sobre protección a los indígenas y apoyo a las comunidades aborígenes.

Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Macris).** — (*Lee*):

## Dictamen de comisión

*Honorable Senado:*

Vuestras comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda han considerado el proyecto de ley de los señores senadores de la Rúa, León y otros sobre protección a los indígenas y apoyo a las comunidades aborígenes; y, por las razones que dará el miembro informante, os aconsejan la aprobación del siguiente

## PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.**I Objetivos*

Artículo 1º — Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades o tribus indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agraria, minera o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.

*II De las comunidades indígenas*

Art. 2º — A los efectos de la presente ley, reconócese a las comunidades o tribus indígenas radicadas en el país como sociedades agrarias o mineras con personería jurídica, siempre que se dediquen a la actividad agropecuaria o minera en cualquiera de sus formas, haciendo de ello su modo de vida habitual o principal. La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación.

Art. 3º — La inscripción será solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la comunidad o tribu, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organización y los datos y antecedentes que puedan servir para acreditar su preexistencia y reagrupamiento y los demás elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello, ésta otorgará o rechazará la inscripción, la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la determinaron.

Art. 4º — Las relaciones entre los miembros de las comunidades o tribus indígenas con personería jurídica reconocida se regirán por las normas de las sociedades cooperativas, correspondiendo a cada integrante igual participación que a los demás e idénticos derechos y deberes. Las mismas normas se aplicarán para sus relaciones con terceros y para su eventual extinción.

### III. De la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas

Art. 5º — Créase la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas que actuará bajo la dependencia que establezca el Poder Ejecutivo. Deberá constituirse dentro de los 180 días y contará con un consejo asesor integrado por:

- a) Un representante del Ministerio de Trabajo;
- b) Un representante del Ministerio de Economía;
- c) Un representante del Ministerio de Educación y Justicia;
- d) Un representante del Ministerio del Interior;
- e) Un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa;
- f) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria;
- g) Los representantes aborígenes por las comunidades indígenas, que designe directamente la autoridad de aplicación, entre personas de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos de los aborígenes en nuestro país. La reglamentación determinará el número y los requisitos mínimos con que deberán contar estos representantes.

Art. 6º — Corresponde a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas:

- a) Actuar como organismo de aplicación de la presente ley;
- b) Dictar su reglamento funcional y normas de aplicación de la presente ley y proponer las que correspondan a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo;
- c) Velar por el cumplimiento de la presente ley y la consecución de sus objetivos;
- d) Llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades o tribus que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites;
- e) Elaborar e implementar planes de colonización, de educación y de salud, de acuerdo con los objetivos de la presente ley;
- f) Proponer el presupuesto para la atención de los problemas indígenas y asesorar en todo lo relativo a fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país.

### IV. De la adjudicación de tierras

Art. 7º — Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades o tribus indígenas existentes en el país, debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal o minera según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comu-

nidad o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las que tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad o tribu, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.

Art. 8º — La autoridad de aplicación elaborará, al efecto, planes de colonización conforme a las disposiciones de la presente ley y de las leyes específicas vigentes sobre el particular, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y, posteriormente, de los títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia. Si fuese necesario, la autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el Congreso Nacional las leyes necesarias.

Art. 9º — La adjudicación de tierras prevista se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de créditos especiales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras, y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación.

Art. 10. — Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal o minera, en cualquiera de sus especialidades. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización cooperativista de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes, complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos.

Art. 11. — Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Los títulos de propiedad se inscribirán como bienes de familia, conforme a la ley 14.394 y concordantes, y contendrán la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años a contar de su fecha.

Art. 12. — Los adjudicatarios están obligados a:

- a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente los integrantes de la comunidad o el adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar;
- b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad

adjudicada, ni subdividir o anexar las parcelas sin autorización de la autoridad de aplicación. Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos;

- c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas.

Art. 13. — En caso de incumplimiento grave de las obligaciones establecidas, la autoridad de aplicación podrá disponer, previo sumario en que se asegure la defensa, que el dominio de las tierras adjudicadas se retrotraiga a la Nación, sin otra indemnización que el pago de las mejoras útiles introducidas. En caso de extinción de la comunidad o tribu o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas pasarán a la Nación, pero la autoridad de aplicación podrá adjudicarlas total o parcialmente a los grupos familiares subsistentes. El miembro de una comunidad o tribu adjudicataria de tierras que se retire de ellas no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran quedarán en beneficio de la misma comunidad o tribu a que pertenecía.

#### V. De los planes de educación

Art. 14. — La autoridad de aplicación coordinará con el Ministerio de Cultura y Educación y con los gobiernos provinciales la realización de planes de alfabetización y educación para la elevación sociocultural de los miembros de las comunidades indígenas, contemplando la implementación de campañas intensivas de alfabetización para adultos y la creación de escuelas-hogares en las comunidades indígenas.

Art. 15. — Se impartirá a los aborígenes la enseñanza prevista en los planes comunes, pero se incorporará a ellos lo relativo a los valores propios de cada comunidad, dividiéndose el ciclo primario en dos etapas: para la primera, que comprenderá los tres primeros años, la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna y se dictará como materia especial el idioma oficial; para la segunda, que comprenderá los siguientes hasta la finalización del ciclo primario, la enseñanza será bilingüe. La autoridad de aplicación promoverá la formación y capacitación de maestros bilingües, preferentemente indígenas, creando al efecto centros especiales y la preparación de textos adecuados a la característica especial de la enseñanza.

Art. 16. — En la enseñanza se deberá resguardar la tradición oral y artesanal de cada comunidad indígena, sus juegos y deportes y el aprendizaje del cultivo de la tierra con el conocimiento de las técnicas modernas, procurando habilitar y mantener granjas o huertas escolares. Se promoverá la difusión de la historia aborígen y poscolombina y la enseñanza y práctica del cooperativismo.

Art. 17. — La autoridad de aplicación supervisará y asesorará a los establecimientos de enseñanza para indígenas, oficiales o privados, todos los cuales deberán

ajustarse a las disposiciones de esta ley. Los establecimientos comunes a los que asistan alumnos aborígenes observarán respecto a éstos, en cuanto sea posible, las previsiones precedentes.

#### VI. De los planes de salud

Art. 18. — La autoridad de aplicación coordinará con la Secretaría de Salud Pública de la Nación y con los gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas para la prevención y recuperación de la salud física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la atención de las comunidades dispersas. Se promoverá la formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas de radiación de las comunidades.

Art. 19. — Se declarará prioritario el diagnóstico y tratamiento mediante control periódico de las enfermedades contagiosas, endémicas y pandémicas en toda el área de asentamiento de las comunidades indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada la presente ley deberá realizarse un catastro sanitario de la diversas comunidades indígenas, arbitrándose los medios para la profilaxis de las enfermedades y la distribución en forma gratuita bajo control médico de los medicamentos necesarios.

Art. 20. — La autoridad de aplicación llevará a cabo planes de saneamiento ambiental, en especial para la provisión de agua potable, eliminación de instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección, campañas de eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea necesario para asegurar condiciones higiénicas en los lugares de emplazamiento de las comunidades indígenas, promoviendo a ese efecto la educación sanitaria de sus integrantes.

Art. 21. — En los planes de salud para las comunidades indígenas deberá tenerse especialmente en cuenta:

- a) La atención bucodental;
- b) La realización de exámenes de laboratorio que complementen los exámenes clínicos;
- c) La realización de exámenes cardiovasculares, a fin de prevenir la mortalidad prematura;
- d) El cuidado especial del embarazo y parto y de la atención del binomio madre-niño;
- e) La creación de centros de educación alimentaria y demás medidas necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición equilibrada y suficiente.

#### VII. De los derechos previsionales

Art. 22. — Los aborígenes dedicados a la explotación agropecuaria, forestal o minera gozarán de los derechos de jubilación ordinaria y pensión, de acuerdo a la ley de jubilaciones para los trabajadores rurales.

Art. 23. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Salud y Acción Social para la atención del problema indígena, y las propias de los respectivos ministerios o secretarías de Es-

tado para la atención de sus problemas específicos, hasta la inclusión de las nuevas partidas necesarias en el presupuesto general de la Nación.

Art. 24 — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Vicente L. Saadi. — Juan Trilla. — Adolfo Gass. — Ricardo E. Laferrère. — Felipe Celli. — Antonio T. Berhongaray. — Ramón A. Araujo. — Luis A. León. — Fernando de la Rúa. — Francisco R. Villada. — Julio A. Amoedo. — Edgardo P. V. Murguía.*

## PROYECTO DE LEY DE PROTECCION A LOS INDIGENAS Y APOYO A LAS COMUNIDADES ABORIGENES

### PROYECTO DE LEY

*El Senado y Cámara de Diputados, etc.*

#### I. Objetivos

Artículo 1º — Declárase de interés nacional la protección y apoyo a los aborígenes y a las comunidades o tribus indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena incorporación al proceso socio-económico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria o minera, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.

#### II. De las comunidades indígenas

Art. 2º — A los efectos de la presente ley, reconócese a las comunidades o tribus indígenas radicadas en el país como sociedades agrarias o mineras con personería jurídica, siempre que se dediquen a la actividad agropecuaria o minera en cualquiera de sus formas, haciendo de ello su modo de vida habitual o principal. La personería jurídica se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación.

Art. 3º — La inscripción será solicitada haciendo constar el nombre y domicilio de la comunidad o tribu, los miembros que la integran y su actividad principal, las pautas de su organización y los datos y antecedentes que pueda servir para acreditar su preexistencia y reagrupamiento y los demás elementos que requiera la autoridad de aplicación. En base a ello, ésta otorgará o rechazará la inscripción, la que podrá cancelarse cuando desaparezcan las condiciones que la determinaron.

Art. 4º — Las relaciones entre los miembros de las comunidades o tribus indígenas con personería jurídica reconocida se regirán por las normas de las sociedades cooperativas, correspondiendo a cada integrante igual participación a los demás e idénticos derechos y deberes. Las mismas normas se aplicarán para sus relaciones con terceros y para su eventual extinción.

#### III. De la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas

Art. 5º — Créase, con carácter de entidad descentralizada dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, la que deberá constituirse dentro de los ciento ochenta días a contar de la promulgación de la presente ley. Esta comisión actuará bajo la presidencia del director nacional de asuntos indígenas como representante del Ministerio de Salud y Acción Social y estará integrada por:

- Un representante del Ministerio de Trabajo;
- Un representante del Ministerio de Economía;
- Un representante del Ministerio de Cultura y Educación;
- Un representante de la Secretaría de Agricultura y Ganadería;
- Cuatro representantes aborígenes en representación de las comunidades indígenas designados cada tres años por el Parlamento Nacional Indígena, en sesión plenaria que se realizará con intervención del Ministerio de Salud y Acción Social para verificar su integración y decisión.

Art. 6º — Corresponde a la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas:

- Actuar como organismo de aplicación de la presente ley;
- Dictar su reglamento funcional y normas de aplicación de la presente ley y proponer las que correspondan a la facultad reglamentaria del Poder Ejecutivo;
- Velar por el cumplimiento de la presente ley y la consecución de sus objetivos;
- Llevar el Registro Nacional de Comunidades Indígenas y disponer la inscripción de las comunidades o tribus que lo soliciten y resolver, en su caso, la cancelación de la inscripción, para todo lo cual deberá coordinar su acción con los gobiernos provinciales y prestar el asesoramiento necesario para facilitar los trámites;
- Elaborar e implementar planes de colonización, educación y de salud, de acuerdo con los objetivos de la presente ley;
- Proponer el presupuesto para la atención de los problemas indígenas y asesorar en todo lo relativo a protección, fomento, promoción y desarrollo de las comunidades indígenas del país.

#### IV. De la adjudicación de tierras

Art. 7º — Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades o tribus indígenas existentes en el país, debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal o minera según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se

hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad o tribu, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.

Art. 8º — La autoridad de aplicación elaborará al efecto planes de colonización adecuados, de acuerdo a las disposiciones de la presente ley y de las leyes nacionales de colonización, de modo de efectuar sin demora la adjudicación a los beneficiarios de tierras fiscales de propiedad de la Nación. El Poder Ejecutivo dispondrá la transferencia de las tierras afectadas a esos fines a la autoridad de aplicación para el otorgamiento de la posesión y, posteriormente, de los títulos respectivos. Si en el lugar de emplazamiento de la comunidad no hubiese tierras fiscales de propiedad de la Nación aptas o disponibles, se gestionará la transferencia de tierras fiscales de propiedad provincial para los fines indicados o su adjudicación directa por el gobierno de la provincia. Si fuese necesario, la autoridad de aplicación propondrá la expropiación de tierras de propiedad privada al Poder Ejecutivo, el que promoverá ante el Congreso nacional las leyes necesarias.

Art. 9º — La adjudicación de tierras previstas se efectuará a título gratuito. Los beneficiarios estarán exentos de pago de impuestos nacionales y libres de gastos o tasas administrativas. El organismo de aplicación gestionará exenciones impositivas ante los gobiernos provinciales y comunales. El Poder Ejecutivo dispondrá la apertura de líneas de créditos especiales a los adjudicatarios para el desarrollo de sus respectivas explotaciones, destinados a la adquisición de elementos de trabajo, semillas, ganado, construcciones y mejoras y cuanto más pueda ser útil o necesario para una mejor explotación.

Art. 10. — Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal o minera, en cualquiera de sus especialidades. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización cooperativista de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes, complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos.

Art. 11. — Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Los títulos de propiedad se inscribirán como bienes de familia, conforme a la ley 14.394 y concordantes y contendrán la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años a contar de su fecha.

Art. 12. — Los adjudicatarios están obligados a:

- a) Radicarse en las tierras asignadas y trabajarlas personalmente los integrantes de la comunidad o al adjudicatario individual con la colaboración del grupo familiar;
- b) No vender, arrendar o transferir bajo ningún concepto o forma sus derechos sobre la unidad adjudicada, ni subdividir o anexas las parcelas, sin autorización de la autoridad de apli-

cación. Los actos jurídicos realizados en contravención a esta norma serán reputados nulos a todos sus efectos;

- c) Observar las disposiciones legales y reglamentarias y las que dicte la autoridad de aplicación relativas al uso y explotación de las unidades adjudicadas.

Art. 13. — En caso de incumplimiento grave de las obligaciones establecidas, la autoridad de aplicación podrá disponer, previo sumario en que se asegure la defensa, que el dominio de las tierras adjudicadas se retrotraiga a la Nación, sin otra indemnización que el pago de las mejoras útiles introducidas. En caso de extinción de la comunidad o tribu o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas pasarán a la Nación, pero la autoridad de aplicación podrá adjudicarlas total o parcialmente a los grupos familiares subsistentes. El miembro de una comunidad o tribu adjudicataria de tierras que se retire de ella, no podrá reclamar ningún derecho sobre la propiedad; los que le correspondieran, quedarán en beneficio de la misma comunidad o tribu a que pertenecía.

#### V. De los planes de educación

Art. 14. — La autoridad de aplicación coordinará con el Ministerio de Cultura y Educación y con los gobiernos provinciales la realización de planes de alfabetización y educación para la elevación sociocultural de los miembros de las comunidades indígenas, contemplando la implementación de campañas intensivas de alfabetización para adultos y la creación de escuelas hogares en las comunidades indígenas.

Art. 15. — Se impartirá a los aborígenes la enseñanza prevista en los planes comunes, pero se incorporará a ellos lo relativo a los valores propios de cada comunidad, dividiéndose el ciclo primario en dos etapas: para la primera, que comprenderá los tres primeros años, la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna y se dictará como materia especial el idioma oficial; para la segunda, que comprenderá los siguientes hasta la finalización del ciclo primario, la enseñanza será bilingüe. La autoridad de aplicación promoverá la formación y capacitación de maestros bilingües, preferentemente indígenas, creando al efecto centros especiales, y la preparación de textos adecuados a la característica especial de la enseñanza.

Art. 16. — En la enseñanza se deberá resguardar la tradición oral y artesanal de cada comunidad indígena, sus juegos y deportes y el aprendizaje del cultivo de la tierra con el conocimiento de las técnicas modernas, procurándose habilitar y mantener granjas o huertas escolares. Se promoverá la difusión de la historia aborigen y poscolombina, y la enseñanza y práctica del cooperativismo.

Art. 17. — La autoridad de aplicación supervisará y asesorará a los establecimientos de enseñanza para indígenas, oficiales o privados, todos los cuales deberán ajustarse a las disposiciones de esta ley. Los establecimientos comunes a los que asistan alumnos aborígenes observarán respecto a éstos, en cuanto sea posible, las previsiones precedentes.

VI. *De los planes de salud*

Art. 18. — La autoridad de aplicación coordinará con la Secretaría de Salud Pública de la Nación y con los gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la atención de las comunidades dispersas. Se promoverá la formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas de radicación de las comunidades.

Art. 19. — Se declara prioritario el diagnóstico y tratamiento, mediante control periódico, de las enfermedades contagiosas, endémicas y pandémicas en toda el área de asentamiento de las comunidades indígenas. Dentro del plazo de sesenta días de promulgada la presente ley deberá realizarse un catastro sanitario de las diversas comunidades indígenas, arbitrándose los medios para la profilaxis de las enfermedades y la distribución en forma gratuita, bajo control médico, de los medicamentos necesarios.

Art. 20. — La autoridad de aplicación llevará a cabo planes de saneamiento ambiental, en especial para la provisión de agua potable, eliminación de instalaciones inadecuadas, fumigación y desinfección, campañas de eliminación de roedores e insectos y lo demás que sea necesario para asegurar condiciones higiénicas en los lugares de emplazamiento de las comunidades indígenas promoviendo a ese efecto la educación sanitaria de sus integrantes.

Art. 21. — En los planes de salud para las comunidades indígenas deberá tenerse especialmente en cuenta:

- a) La atención bucodental;
- b) La realización de exámenes de laboratorio que complementen los exámenes clínicos;
- c) La realización de exámenes cardiovasculares, a fin de prevenir la mortalidad prematura;
- d) El cuidado especial del embarazo y parto y de la atención del binomio madre-niño;
- e) La creación de centros de educación alimentaria y demás medidas necesarias para asegurar a los indígenas una nutrición equilibrada y suficiente.

VII. *De los derechos previsionales*

Art. 22. — Los aborígenes dedicados a la explotación agropecuaria, forestal o minera gozarán de los derechos de jubilación ordinaria y pensión, de acuerdo a la ley de jubilaciones para los trabajadores rurales.

Art. 23. — Los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley se tomarán de las partidas presupuestarias asignadas al Ministerio de Salud y Acción Social para la atención del problema indígena, y las propias de los respectivos ministerios o secretarías de Estado para la atención de sus problemas específicos, hasta la inclusión de las nuevas partidas necesarias en el presupuesto general de la Nación.

Art. 24. — Comuníquese al Poder Ejecutivo.

*Fernando De La Rúa. — Luis A. León. — Faustino M. Mazzucco. — Héctor J. Velázquez. — Humberto C. Sigal.*

## FUNDAMENTOS

Señor presidente:

Podría decirse que en nuestro país no existe un problema indígena, como cuestión racial, y que el aborigen, en términos generales, goza de un amparo jurídico idéntico al del resto de los ciudadanos argentinos. Empero, es cierto que una serie de factores, entre los que cuentan una situación de inferioridad respecto de las condiciones de vida de nuestra civilización, el marginamiento geográfico de numerosas comunidades, agravado a veces por la fidelidad a usos y costumbres atávicos, entre otras razones, determinan en rigor una desigualdad que suele traducirse en un patético desamparo que no solamente lastima la dignidad de nuestra República, sino que a su vez conmueve nuestra misma condición humana.

De por sí, este desamparo de un gran número de argentinos, cuya realidad es tan conocida que no es necesario describirla, motiva este proyecto de ley que presentamos a la consideración del Honorable Senado. No obstante, otros fundamentos lo justifican. En efecto, no puede olvidarse que la población indígena que actualmente habita en el territorio nacional es la heredera de los grupos étnicos que poblaban los paisajes de nuestras tierras. Es decir, se trata nada menos que del origen ancestral de nuestra nacionalidad, sin el cual ésta quedaría trunca. Hoy, cuando la casi totalidad de los argentinos sustenta la voluntad de ahondar en las raíces de lo nacional para avanzar hacia un destino unitivo de grandeza, es indispensable tomar conciencia de que en los valores de dicho origen, subyacentes en las diversas culturas aborígenes, existen muy importantes elementos espirituales que es imperioso preservar en cuanto hacen a los sentimientos nacionales. No se trata, por ende, sólo de buscar un paliativo que permita disminuir en parte las vicisitudes que están acostumbrados a sufrir nuestros compatriotas indígenas, o de compensar en algo el desapoderamiento histórico padecido por quienes fueran los naturales dueños de la tierra, sino asumir la preservación del ancestro cultural de América del Sur, impidiendo su disgregación definitiva, toda vez que si aquél perece desaparecerá, con sus inexorables consecuencias, un ingrediente esencial para la expresión de la cultura americana.

Si bien un sinnúmero de preceptos normativos abarcaron a través de muchos años el tema, no se ha dado todavía un régimen específico que contemple en profundidad la situación indígena. A partir de las normas coloniales, en las cuales llegaría a discutirse la condición jurídica de los indios, muchas fueron las que se han ido sucediendo, destacándose la propia Constitución de 1853, que en su artículo 67, inciso 15, establece, al enumerar las facultades del Congreso de la Nación, la de "conservar el trato pacífico con los indios y promover la conversión de ellos al catolicismo". De hecho, nuestra Carta Magna consideró a los aborígenes como argentinos iguales a los demás, sin reconocer a la tribu como organización o comunidad autónoma con personería jurídica. La ley 215 de 1867, en cambio, dispuso que los territorios que ocuparian los indígenas se determinarían por convenios entre el gobierno y las tribus, lo que implicaba, en alguna medida, reconocer a éstas la capacidad para representar a los individuos que las



integraban. En cumplimiento de esto se concretó más tarde la entrega de tierras a los caciques Namuncurá, Trippilat y Saihueque, entre otras normas similares. Hay antecedentes jurisprudenciales, incluso, que cita De Vedia en su *Tratado de Derecho Constitucional*, donde se decidió que la distribución de los bienes sucesorios debía hacerse según los usos y costumbres de la tribu, por encima de las normas del Código Civil, con lo cual se evidenciaba un expreso reconocimiento de la realidad jurídica de aquella. El primer ordenamiento legal de alguna importancia en punto al derecho indigenista lo hallamos sin embargo recién en 1953, en la ley 14.954. En dicho texto se pretendió, por primera vez, organizar un régimen orgánico sobre tierras y colonización con indígenas, cuyos antecedentes más remotos los encontramos en las experiencias misioneras de algunas organizaciones religiosas y más tarde en las normas que acerca de la materia contenía la ley 817 de 1876, debida a la inspiración de Avellaneda, y años después la ley 4.167 sobre tierras fiscales. Por su lado, un variado número de organismos nacionales intentaron, con muy relativo éxito, ordenar una política indigenista, entre los que cabe mencionar a la Dirección de Protección al Aborigen, dependiente de la Dirección General de Migraciones, y a la Dirección General de Asuntos Indígenas y Regionales, dependiente primero del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, luego del Ministerio del Interior, posteriormente del Ministerio de Bienestar Social, desenvolviéndose hoy el día dentro de la órbita del Ministerio de Salud y Acción Social.

Un primer aspecto del presente proyecto parte de una premisa fundamental, cual es la entrega en propiedad a los aborígenes de las tierras a adjudicarse. Mas, como el espíritu que impregna su contenido es el de respeto a las propias peculiaridades de cada comunidad aborigen, se prevé la propiedad colectiva para aquellos casos en que las características vitales de la comunidad conformen una experiencia comunitaria. En virtud de los fines legales, los fundos se entregarán en forma de unidades económicas, acorde con las modernas concepciones que rigen la política colonizadora. La situación económica de las comunidades, por su parte, sumado al sentido reparador que, asimismo, debe perseguir una ley de este tipo, imponen la necesidad de que la entrega de los fundos se realice a título gratuito, lo que así se regula. En punto al asesoramiento técnico que se considera de importancia asegurar para el buen cumplimiento de los fines legales, se consideró relevante establecer que se lo deberá brindar sobre la base del respeto a los usos y costumbres de los propios aborígenes, a los cuales deberá aquél complementar y coadyuvar. Por lo demás, se consagran las pautas de rigor en la materia, en lo que hace a los créditos a otorgarse, a las exenciones impositivas, a la inembargabilidad e inejecutabilidad de los predios, a la inscripción de éstos como bien de familia, a las obligaciones de los beneficiarios en lo referente a la residencia en la tierra, al trabajo personal y familiar, a la no transferencia de los derechos del lote, a la no subdivisión de las parcelas, etc. Por último, se recomienda a las provincias el dictado de normas análogas a efectos de lograr una legislación armónica sobre la materia en todo el territorio de la República.

El proyecto se retiene también al problema de la educación de los aborígenes. En nuestro territorio nacional habitan hoy, en las denominadas reservaciones indígenas, millares de hombres y mujeres descendientes directos de los antiguos moradores de las tierras que en la actualidad conforman nuestra patria.

Ellos son herederos de la cultura que su civilización les legó, como riquísimo patrimonio que a través de generaciones se ha ido transmitiendo de padres a hijos y que han sabido resguardar a pesar de las penurias de todo tipo sufridas a lo largo de los años. Una vez incorporado definitivamente a nuestro ser nacional —integrado también por los aportes de la civilización occidental—, servirá para consolidar realmente la identidad de nuestra cultura nacional.

Es, pues, tarea de todos revitalizarlo, dándole el lugar que le corresponde, y no acallándolo o ignorándolo, para que se concreten esas aspiraciones de integración nacional.

Las condiciones socioeconómicas en que se desarrolla la vida de muchas de las comunidades indígenas son bien conocidas. Altas tasas de subalimentación, de mortalidad infantil, de viviendas precarias, desempleo en la zona, de analfabetismo, etcétera, comprenden el cuadro de situación de las mismas, que, completado con la carencia o deficiente infraestructura sanitaria, educacional, vial, de comunicación, etcétera, nos dan la pauta de esa realidad.

La educación primaria es una vía extraordinaria para la formación integral de todo ser humano, pues con su aporte y el de los valores personales el hombre puede concretar de una manera más eficaz sus propias aspiraciones y las de la comunidad a que pertenece. La educación de todos los miembros de un pueblo está en estrecha relación con su libertad. Todos los habitantes del país deben tener la posibilidad de recibir una educación acorde con el medio vital en que se desarrollan.

Las comunidades indígenas poseen, como queda dicho, una riquísima cultura integrada por valores, costumbres y tradiciones y una experiencia propia —debido al medio ambiente en que viven— que no pueden ser desdeñadas al impartirse la educación, pues sería atentar contra su propia libertad. Por ello proponemos las pautas señaladas en el capítulo sobre educación de la presente ley, en cuya implementación es esencial la participación de los interesados, es decir, de las comunidades indígenas, como condición necesaria por el importantísimo aporte que brindarán.

El gobierno nacional, por medio del organismo de aplicación, deberá reunir toda la información y trabajos que hoy están dispersos e iniciar los que considere oportunos a fin de idear los programas y precisar el contenido de los textos y de los planes de educación que se impartirá en los establecimientos a su cargo.

Como lo han expresado innumerables reuniones, congresos y parlamentos indígenas, los maestros deben ser preferentemente integrantes de las comunidades que estén o sean capacitados a tal efecto, o maestros bilingües, pues el conocimiento del idioma y del medio físico y humano es fundamental para llevar a cabo con óptimos resultados esta tarea educativa. Se propone que la enseñanza se imparta en la lengua nativa duran-

te los tres primeros años de estudio incluyéndose como materia el idioma oficial de nuestro país, para así lograr en los años siguientes a este primer ciclo una educación bilingüe que preserve la lengua nativa y asegure el dominio de lo nacional. Esta aspiración ha sido reiterada en las reuniones indígenas antes mencionadas.

Es importante señalar que el contenido de la educación debe ser el mismo que se imparte en todo el país como educación común, pero estará complementado teniendo en cuenta las costumbres, los valores y el medio físico propios de la comunidad a la que se dirige. Por ese debe incluirse la enseñanza de las tradiciones artesanales de cada región, a fin de revitalizarlas en su carácter histórico y representativo de las costumbres legadas a través de generaciones, desechando así la concepción de las mismas como un mero asunto de comercio frente al turista.

Por las condiciones en que viven muchos de los integrantes de las comunidades indígenas, y las largas distancias que muchas veces deben recorrer diariamente los niños que asisten a la escuela, es fundamental, para evitar el característico ausentismo escolar propio de esas regiones, dotar a cada establecimiento de un comedor escolar y, si es necesario por el medio geográfico climático, construir o remodelar la infraestructura ya existente, a fin de dotar a cada región necesitada de una escuela-hogar, para que todo niño pueda realmente acceder a la educación que allí se imparta.

Otro aspecto importante entre las ventajas de un sistema educativo así concebido, es que las campañas de alfabetización de adultos llevadas a cabo a través de estas escuelas serán mucho más eficaces para desterrar definitivamente esa carencia del pueblo argentino.

Pensamos que las normas propuestas servirán como instrumento eficaz para cristalizar en hechos concretos las aspiraciones largamente mantenidas por los integrantes de las comunidades indígenas de nuestra patria, de acceder a una educación primaria impartida por sus hermanos de raza o por quienes comprendan y conozcan sus valores propios y que, en sus contenidos y en los textos, refleje su acervo cultural para que, revitalizado, sea un aporte real a la integración definitiva de nuestro ser nacional.

La última parte del proyecto se refiere a la protección de la salud de las comunidades indígenas. No hay duda que requieren planes especiales y la realización de campañas intensivas que contemplen las principales carencias sanitarias de los grupos que habitan nuestro país. La mortalidad prematura, la falta de educación sanitaria, los problemas alimentarios deben constituirse en motivo de preferente atención.

Se prevé la condición de los aborígenes frente al sistema previsional. En este sentido, su incorporación al régimen para los trabajadores rurales es una solución práctica y justa.

Para la eficacia de los objetivos perseguidos en esta ley se crea un organismo de aplicación —la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas— que funcionará como entidad descentralizada con facultades propias. A su cargo estará velar por el cumplimiento de la ley e instrumentar los planes de colonización, educación y salud

que se proponen. Los indígenas necesitan un organismo específico que se ocupe específicamente de sus problemas, de modo que su solución no quede diluida en los planes generales de las distintas áreas. Se ha querido dar representatividad a los aborígenes, porque ellos mismos son quienes mejor conocen sus problemas. De allí la inclusión de cuatro representantes indígenas, que serán designados por el Parlamento Nacional Indígena, institución que existe de hecho. La realidad no es ni puede ser formal. Afrontamos un problema en el cual los hechos superan a las formas. De allí que el reconocimiento de ese Parlamento como expresión concreta, significa que la ley asuma simplemente una realidad preexistente. La presencia del Ministerio de Salud y Acción Social para verificar la constitución y decisión del Parlamento, tiende a evitar cualquier dificultad o discrepancia y posibilita una rápida solución si algún inconveniente se presenta.

El proyecto reconoce personalidad jurídica a las comunidades indígenas. Un simple trámite de inscripción y reconocimiento les da vida jurídica propia como sociedades agrarias o mineras. Esto permitirá adjudicar las tierras a la comunidad y significará recoger una realidad indiscutible. El derecho debe encontrar nuevas formas para que la justicia no se demore. Esto justifica la proposición de ese paso, que constituye una solución novedosa. De todos modos, y en tanto existen indígenas no agrupados en comunidades o tribus, el proyecto prevé la posibilidad de adjudicar tierras en forma individual, con preferencia a quienes constituyan una familia. La amplitud de la norma hace que no existan trabas formales para que la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas pueda actuar con amplitud para la solución de los múltiples problemas que deben ser atendidos.

Este proyecto —que ha sido elaborado juntamente con aborígenes de las más diversas tribus— aspira a servir a una causa justa: la remoción de obstáculos que impiden a los indígenas alcanzar la igualdad plena a que tienen derecho y la superación de las demoras e injusticias que sufren, atendiendo sus legítimos reclamos. Con esto retomamos de algún modo la idea que alentó el ministro Juan S. Palmero cuando, durante el gobierno de Arturo Illia, implementó un censo indígena de modo de conocer la realidad para adoptar orgánicamente las soluciones necesarias. Este proyecto procura afrontarlas, pero la ley no resolverá por sí sola la cuestión. Será preciso una acción intensa y eficaz por parte de los organismos de aplicación. Confiamos en que existe una coincidencia general en torno a los fines enunciados; y sobre todo, que se contará con el aporte y la cooperación de los propios indígenas, que no piden caridad ni favor, sino justicia; es decir, ser parte en el proceso de cambio como ciudadanos iguales en derechos y responsabilidades. Y es esto lo que hará posible lograr aquellos altos objetivos.

Señor presidente: con lo expuesto, reiteramos el proyecto presentado por el senador Fernando de la Rúa el 25 de septiembre de 1974 (Diario de Sesiones Senado, año 1974, Tomo III, páginas 2219/2223), con el ánimo de reactualizar la solución legislativa necesaria a este problema y promover el debate útil para mejorar la ini-

ciativa. En la cuestión está presente un principio esencial de solidaridad y justicia que compartimos e impulsamos convencidos que la integración de la comunidad nacional precisa el respeto a los derechos de los compatriotas indígenas y la promoción de sus comunidades en la alta significación que tienen como parte de nuestra sociedad.

*Fernando de la Rúa. — Luis A. León. — Faustino M. Mazzucco. — Héctor J. Velázquez. — Humberto C. Sigal.*

**Sr. Presidente (Otero).** — En consideración en general.

Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Señor presidente: iníciase el tratamiento del dictamen de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda en el proyecto de ley sobre política indígena y apoyo a las comunidades aborígenes.

Debo decir sobre este asunto que se ha trabajado intensamente en esta Cámara en reuniones en las que se intercambiaron opiniones con los representantes de las comunidades aborígenes, a partir de la iniciativa de invitar a muchos de ellos a concurrir a este Senado. Esta es la casa de las leyes, la casa de todos los argentinos y ellos han venido, como parte de nuestro pueblo, a participar en las conversaciones propuestas, para hablar no sólo de este proyecto sino a fin de intercambiar comentarios, observaciones y sugerencias que lo mejorarán.

Hemos trabajado intensamente estos días —en particular durante la jornada de hoy— y llegamos a una síntesis de coincidencias que nos llena de satisfacción, porque no se trata de imponer una ley sino de lograr una norma que los indígenas argentinos sientan que es para ellos, a modo de reparación histórica debida y necesaria; para que llegue la justicia a nuestros compatriotas indígenas, durante largo tiempo postergada por las dificultades y vicisitudes que hemos vivido los argentinos.

Hace muchos años, en 1964, me tocó alentar como asesor del Ministerio del Interior, la realización de un censo indígena nacional. El ministro Juan Palmero impulsó esta idea que se llevó a cabo por un decreto del presidente Arturo Illia. Ese censo era la base para la implementación de una política de fondo en beneficio de la población indígena.

Decían los fundamentos del decreto 3.998, del 27 de mayo de 1965: *(Lee)* "Que es imperioso atender al mejoramiento de las condiciones de su desarrollo integral mediante una acción sistematizada y eficaz, cumplida coordinadamente por el gobierno nacional, los gobiernos provinciales y el concurso de especialistas y técnicos universitarios; que con el fin de iniciar las ejecu-

ción de una política indigenista coherente y continua, asentada en datos reales que permitan proyectarla sobre bases científicas, es necesario investigar los problemas por que atraviesan estos grupos, de la sociedad nacional...".

En su virtud se disponía la realización de ese censo. Pero un golpe de Estado nefasto se abatía el 28 de junio de 1966 sobre la República; el censo se hizo pero la política quedó trunca.

Pasó el tiempo y, en 1974, recogiendo las recomendaciones de los parlamentos indígenas nacionales, presenté un proyecto de ley integral para las comunidades indígenas, que tampoco alcanzó a ser tratado. Ese proyecto es el antecedente de éste que hoy consideramos, que lo reitera y mejora.

Entonces se constituyó en el Senado una Comisión Especial de Asuntos Indígenas. Nuevamente un golpe de Estado interrumpió el Congreso e impidió otra vez el debate y sanción de la ley necesaria.

Venimos, diez años después, con la persistencia en la misma idea y la vigencia de idénticos reclamos.

Esta ley es obra de todos porque todos los sectores del Senado comparten la preocupación y alientan iguales ideas y principios sobre este trascendente tema, que nos viene de la historia. El proyecto procura afrontar desigualdades e injusticias que ya el general San Martín, en su campaña libertadora, enunciara en un mensaje a los indígenas cuando les decía: *(Lee)* "Compatriotas, amigos, descendientes de los incas. Ya llegó para vosotros la época venturosa de recobrar los derechos que son comunes a todos los individuos de la especie humana, y de salir del horrible abatimiento a que os habían condenado los opresores de nuestro suelo. Los nobles motivos que nos impelieron a sacudir el yugo de España son demasiado notorios a todo el mundo. Vuestra misma sensibilidad, cada día forzada a vejaciones nuevas, es el justificativo más tocante. La conducta, pues, que han seguido los gobiernos independientes de América acredita que nuestros sentimientos no son otros ni otras nuestras aspiraciones, que establecer el reinado de la razón, de la equidad y de la paz sobre las ruinas del despotismo, de la crueldad y la discordia".

Quiero señalar, señor presidente, que los hermanos aborígenes han depositado en nosotros su confianza al plantear con dignidad sus problemas y enunciar sus posibles soluciones.

Hemos mantenido un fecundo intercambio de ideas y, por lo tanto, somos responsables de la respuesta, que no es otra que nuestro reconocimiento de la situación y de las soluciones ade-

cuadas a través de este proyecto, que constituirá el punto de arranque de una política indigenista nacional fundada en la justicia y la igualdad.

Es cierto que la ley no es todo, pero es la base a partir de la cual pueden desarrollarse las conductas, los hechos y los comportamientos, que permitirán lograr la justicia reparadora, imprescindible en cada caso.

Inclusive es posible que en la Cámara de Diputados —en beneficio de la acción bicameral de la tarea legislativa— se introduzcan algunas mejoras, pero lo esencial está en el texto de la ley: el principio reparador de la justicia al reconocer personería jurídica a las comunidades o tribus que habitan nuestro territorio. Este es el dato innovador, la transformación jurídica que cambia la situación de los indígenas.

Al gozar de personería jurídica la comunidad o tribu, puede ser ella la adjudicataria de las tierras que les son debidas a los indígenas, superándose así los problemas que plantean las formas de dominio clásico, con las consecuencias que acarrea la división del condominio y la división por la ley de herencia.

Al mismo tiempo, esta ley preserva una pauta cultural que debemos cuidar: la existencia de la comunidad o tribu, la forma de trabajo comunitaria que en ella se cumple y las modalidades propias de la vida que en ella se desarrolla.

Por estos motivos la ley declara de interés nacional el apoyo a las comunidades aborígenes y les reconoce personería jurídica. Se establece asimismo un sistema simple de inscripción que sirve además para tener un registro que permita orientar las acciones y las políticas a seguir. Como instrumento administrativo para su ejecución se crea la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, con participación de los aborígenes, como un ente descentralizado —para su mayor autonomía—, dependiente del Ministerio de Salud y Acción Social. Esta comisión contará con un Consejo Coordinador para que organice la acción de las distintas áreas del gobierno, que deben concurrir con su apoyo para lograr los objetivos enunciados en la ley en el campo educativo, de la salud, del cooperativismo y de la asistencia tecnológica para la producción agropecuaria y minera.

También existirá en el seno de la comisión un Consejo Indígena que ejercerá, en cierta forma, la representación de las comunidades aborígenes y cumplirá funciones de asesoramiento y control en la ejecución de estas políticas, favoreciendo y facilitando la relación con estas comunidades.

El dictamen de la comisión establece un principio de reparación histórica: la adjudicación de tierras para que puedan desarrollar en plenitud sus actividades.

Desde luego, hay que contemplar la entrega de títulos perfectos a quienes todavía los tuvieren precarios. Se entregarán en propiedad tierras que pertenecen a la Nación en las cuales están asentadas las comunidades, o tierras próximas para evitar el riesgo de causar un no deseado desplazamiento; y en caso de no haberlas, se gestionará la entrega de tierras provinciales o bien la apropiación de tierras privadas para los planes de colonización necesarios, con el criterio de que la tierra debe ser suficiente para el desarrollo de las comunidades, de acuerdo con un concepto de unidad económica.

El proyecto establece también que la propiedad pertenece a la comunidad y que los integrantes de ella comparten los beneficios de la propiedad de la tierra y su explotación. Quien se retira de ella pierde sus derechos; quien se mantiene incorporado, goza de ellos. Y para las relaciones jurídicas, para el modo de desenvolverse y manifestarse en la necesaria interrelación jurídica, de acuerdo con los sistemas vigentes de nuestras leyes, nos remitimos en forma subsidiaria al régimen del cooperativismo, que se funda en el mismo principio de solidaridad que inspira a las comunidades aborígenes.

En caso de extinción de la comunidad, la propiedad de la tierra revierte a la Nación.

El despacho también prevé planes de enseñanza para llevar la educación, que es lo que más exalta la dignidad del hombre y la posibilidad de plena realización de todas las comunidades indígenas, que en los lugares distantes donde se encuentran han sufrido postergación y marginamiento.

Principio esencial de los planes a desarrollar es la preservación de las pautas culturales, de la tradición histórico-cultural de las comunidades aborígenes. La enseñanza debe ser en la lengua nativa durante los tres primeros años, estudiándose el idioma nacional como materia obligatoria; luego de ese primer ciclo, la enseñanza será bilingüe. El cuidado de esa tradición histórico-cultural de la lengua nativa, de los juegos y deportes, de las manifestaciones artesanales que son también expresión de la cultura, es una manera de preservar nuestra propia cultura nacional que está integrada también por las culturas aborígenes que forman parte de nuestro patrimonio espiritual.

Contempla la ley, en fin, la implementación de planes de asistencia sanitaria para que lle-

guen a quienes no reciben aún los beneficios de la asistencia social y la atención de la salud. Campañas sanitarias intensivas, defensa del medio ambiente, educación para la salud, forman parte de los objetivos que debe procurar la autoridad de aplicación.

Por último, contemplamos un sistema previsional para los aborígenes de acuerdo con el régimen de los trabajadores rurales, en una remisión simple, sencilla, en la que hemos considerado se encontraba la solución adecuada.

Este es, en rápido resumen, el contenido del proyecto de ley en una serie de aspectos que era imprescindible contemplar y resolver en la legislación nacional. En las provincias con comunidades indígenas se han dictado leyes de promoción y defensa que regulan derechos importantes de nuestros indígenas. Lo que ocurre es que hacía falta una ley nacional para esta cuestión de la personería jurídica de la comunidad o tribu y su régimen legal, y una norma que estableciera también el principio de adjudicación de tierras en propiedad a las tribus o comunidades.

Después de producido el despacho de la comisión, he considerado algunos aspectos de detalle que aclaran, según pienso, el texto del proyecto. Los señores senadores tienen sobre sus bancas las proposiciones que voy a formular, que mejoran la redacción, sobre lo cual hemos coincidido en el largo diálogo de esta jornada con los representantes de las muchas comunidades indígenas que hoy nos han honrado con su visita.

Caciques notables por su larga acción, indígenas que vienen luchando por sus hermanos a partir de la cultura que adquirieron con esfuerzo —abogados, técnicos—, aborígenes cuyos hermanos quedaron en el solar nativo aguardando el resultado de las deliberaciones de este Senado, han venido aquí para participar con su presencia de este debate y también manifestar su opinión y su esperanza de que se sancione una ley que sea un punto de partida significativo y trascendente para llevar adelante la política indigenista que realice esta reparación y logre la esperada justicia.

El presidente de nuestro cuerpo, el señor vicepresidente de la Nación, los saludó hoy en nombre del Senado para decirles que esta es también su casa. Tuve el placer de saludarlos y exponer sobre nuestro proyecto. Habló el senador León, quien con otros señores senadores nos ha acompañado en la tarea de elaborar esta iniciativa. Estuvo presente el secretario de Promoción y Acción Social del Ministerio de Salud

y Acción Social, doctor Romero Acuña, en cuya área seguramente tendrá que desenvolverse la ejecución de las políticas que aprobemos. Hablaron nuestros hermanos indígenas, con la esperanza de que esta ley sea la base para concretar esos sueños demorados, con la aspiración de que se transformen en un camino de realizaciones necesarias.

Entre los puntos que deben quedar aclarados en el texto del dictamen figura, en primer lugar, el artículo 2º. El despacho de la comisión se limita a conceder la personería jurídica a las comunidades dedicadas a la explotación agrícola o minera. Esta limitación puede ser mal interpretada, y para suplir ese malentendido he proyectado un texto por el que queda claro que el otorgamiento de la personería jurídica se hará a todas las comunidades o tribus indígenas radicadas en el país, sin distinguir entre las que se ocupen de tareas agrícolas o mineras. Esto es así porque hay algunas que realizan actividades artesanales, tareas agroindustriales o industriales, como la fabricación del ladrillo, y que podrían escapar de aquel concepto original.

En segundo lugar, existe una modificación al artículo 5º, referido a la reglamentación administrativo-funcional para la futura implementación de la ley. Los señores senadores tienen sobre sus bancas un texto propuesto, complementado luego por una reforma adicional. Este artículo quedaría redactado de la siguiente manera:

Créase la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, como entidad descentralizada, con participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los noventa (90) días de vigencia de la presente ley. Contará con un Consejo de Coordinación y un Consejo Indígena.

I. El Consejo de Coordinación estará integrado por:

- a) Un representante del Ministerio de Trabajo;
- b) Un representante del Ministerio de Economía;
- c) Un representante del Ministerio de Educación y Justicia;
- d) Un representante del Ministerio del Interior;
- e) Un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa;
- f) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Le corresponderá coordinar la acción de las distintas áreas de gobierno para el cumplimiento de la presente ley.

II. El Consejo Indígena estará constituido por representantes aborígenes, designados por la autoridad de aplicación entre quienes sean propuestos por los Consejos Indígenas Provinciales o, en su defecto, por los gobiernos de provincia.

La reglamentación determinará el número y los requisitos con que deberán contar los representantes.

Ejercerá funciones de asesoramiento y control sobre la ejecución de las políticas indígenas y las relaciones con las comunidades aborígenes.

En su caso, la autoridad de aplicación considerará las recomendaciones que se formulen en parlamentos o congresos indígenas nacionales, representativos de las comunidades aborígenes.

Para aclarar lo mencionado en el despacho original de la comisión, se ha subrayado el sentido de la participación indígena en la Comisión y que las funciones del Consejo Indígena son de auxilio pero también de control en la ejecución de las políticas, porque lo que se quiere es una participación activa de las comunidades aborígenes. Como es posible y deseable que en el futuro se realicen nuevos parlamentos indígenas, hemos creído del caso hacer la previsión, para que se tomen en cuenta sus recomendaciones.

En el inciso d) del artículo 6º debe agregarse un párrafo que asegura la garantía del control judicial por sobre la autoridad de aplicación. Propongo, pues, que se agregue: "Las resoluciones del Comisionado nacional relativas a la inscripción de las comunidades o tribus, así como a su cancelación, serán apelables ante la cámara federal del lugar dentro del plazo de 10 días".

Al artículo 7º corresponde agregar un párrafo que explico a continuación. Se trata del artículo que dispone la adjudicación de tierras a las tribus o comunidades indígenas. En algunos casos esas tierras ya fueron adjudicadas. No se trata de innovar sobre la forma de realizar las adjudicaciones, sólo que a veces ellas se han hecho pero los títulos siguen siendo precarios por no haberse cumplido o completado la entrega. Por eso se propone agregar al final este párrafo: "La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios".

En el artículo 13 hemos considerado conveniente suprimir el primer párrafo, que se re-

fiere a la revocación de la adjudicación en caso de incumplimiento de las obligaciones. Para que no parezca que hay una precariedad tal que los adjudicatarios puedan verse privados de una manera arbitraria de la tierra que se les asignó, hemos suprimido en ese primer párrafo desde donde dice "En caso de incumplimiento", y hasta las palabras "útiles introducidas". Luego sigue como está: "En caso de extinción de las comunidades o tribus, la propiedad revierte a la Nación", etcétera. Queda a cargo de la autoridad de aplicación el control del cumplimiento de las obligaciones que resulten de la adjudicación para la tarea productiva y el desarrollo de la propia comunidad.

En cuanto al artículo 14, hay una modificación que obedece al cambio de designación del ministerio respectivo. Donde dice "La autoridad de aplicación coordinará con el Ministerio de Cultura y Educación y con los gobiernos provinciales...", debe decir simplemente "La autoridad de aplicación coordinará con el ministerio respectivo y con los gobiernos provinciales...". Al evitar la mención del ministerio damos subsistencia a la ley frente a cualquier cambio futuro en la Ley de Ministerios, pero se entiende que se trata siempre del ministerio encargado del área de educación.

Con respecto al artículo 16, que analizamos de manera especial con los compatriotas indígenas que hoy nos visitaron, referente a la preservación de la cultura aborígen, he querido incluirlo de manera más expresa y precisa al tratar lo relativo a la educación y la cultura. Consideramos que debe quedar redactado así: "En la enseñanza se deberá resguardar la tradición histórico-cultural de cada comunidad indígena, sus juegos y deportes y el aprendizaje del cultivo de la tierra con el conocimiento de las técnicas modernas, procurando habilitar y mantener granjas o huertas escolares. Se promoverá la difusión de la historia aborígen y poscolombina y la enseñanza y práctica del cooperativismo". Es prácticamente el mismo texto del despacho de la comisión, sólo que se usa la expresión "tradición" para refirmar el sentido.

En cuanto al artículo 18, la modificación también obedece a la posibilidad de cambio de la estructura administrativa del gobierno. Donde dice:

"La autoridad de aplicación coordinará con la Secretaría de Salud Pública de la Nación y con los gobiernos de provincia", debe decir: "La autoridad de aplicación coordinará con los gobiernos de provincia". Esto es así porque la autoridad del área es el Ministerio de Salud y Ac-

ción Social, de manera que resultaba inadecuado decir que debía coordinar consigo mismo.

El artículo 22 se refiere a los derechos provisionales. En él se habla de quienes se dedican a la producción agropecuaria, forestal o minera; pero como pueden realizarse también otras actividades útiles en las tierras adjudicadas a la comunidad o tribu, como tareas artesanales, industriales o agroindustriales, hemos dado más amplitud a la formulación del texto, que queda redactado de este modo: "Los aborígenes dedicados a las actividades mencionadas en el artículo 10 —se refiere a la realización en la tierra de actividades agropecuarias, forestales, mineras u otras simultáneas con ellas— gozarán de los derechos de jubilación ordinaria y pensión, de acuerdo a la ley de jubilaciones para los trabajadores rurales".

Debo aclarar que en todos los casos de los artículos 7º y 22, cuando se habla de las explotaciones realizables por los aborígenes, debe decir "agropecuaria, forestal, minera o artesanal". Esto se debe a que en el despacho de la comisión se hizo referencia en algún caso a lo agropecuario y minero, con omisión de lo forestal y artesanal, mientras en otro se hablaba de lo agropecuario y artesanal. Buscamos que la mención sea amplia y el texto resulte completo. De cualquier modo habría sido fácil desentrañar el espíritu de las normas.

Va de suyo que en el artículo 10 del proyecto que se complementa con dicho artículo 22, para dejarlo claro se agrega la siguiente frase: "sin perjuicio de otras actividades simultáneas". Por lo tanto, el texto resultaría como sigue: "Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera o artesanal, en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización cooperativista de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes, complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos".

Por último, recojo con mucha satisfacción una observación que ha sido formulada por los indígenas que hoy nos visitaron. En el artículo 23 verán los señores senadores que se habla de la atención "del problema indígena". Esto significará, si se lee mal, que el indígena es un problema. No queremos decir eso, por cierto, sino todo lo contrario. Hablamos de que hay problemas que deben ser resueltos y atendidos en las

comunidades indígenas. Hay problemas de desatención sanitaria y educativa, y de marginación, que redundan, en definitiva, en una grave injusticia. Para no usar, entonces, esta expresión que ha sido observada, hemos pensado en reemplazarla, poniendo simplemente: "de los asuntos indígenas". Con esto el texto resulta suficientemente claro, sin ningún tipo de menoscabo para nadie, ni temor a malinterpretaciones en un asunto que conlleva una especial y justificada sensibilidad.

Estas son las reformas que propongo al texto de la comisión en oportunidad de su consideración. Como los señores senadores advertirán, no cambian el sentido de lo resuelto; no hacen al fondo, pero aclaran el texto y su espíritu, y reafirman el objetivo de preservación de las comunidades indígenas como institución, el reconocimiento de su personalidad jurídica, el resguardo de las pautas culturales que ellas encarnan y la instrumentación de una política que, también en este campo, nos permita realizar la justicia.

De este modo, adecuamos nuestra legislación al Convenio 107 de la Organización Internacional del Trabajo sobre "Protección e integración de las poblaciones indígenas y de otras poblaciones tribales y semitribales en los países independientes". Este importante convenio internacional en su artículo 11 dispone que se deberá reconocer el derecho colectivo o individual de propiedad de las poblaciones indígenas sobre las tierras tradicionalmente ocupadas por ellos. El artículo 18 se refiere a que la artesanía e industrias rurales de las poblaciones indígenas deberán alentarse como factores de desarrollo económico, de suerte que ayuden a dichas poblaciones a elevar su nivel de vida y a adaptarse a métodos modernos de producción y venta de las mercaderías. En el artículo 23 del mismo convenio se indica que deberá enseñarse a los indígenas a leer y a escribir en la lengua materna o, al menos, en la lengua vernácula que más se hable en el grupo al que pertenezcan.

Esto es coincidente con la declaración de derechos humanos de la VI Asamblea del Consejo Mundial de Iglesias, celebrada en Vancouver en 1983, que advirtió que los indígenas están privados de todo poder político real, les es imposible resistir la expropiación de sus tierras, su reubicación física y la negativa a su derecho de mantener su identidad cultural, por lo que invita a hacer esfuerzos para solucionar los reclamos legítimos de los indígenas respecto de las tierras.



Señor presidente y señores senadores: Ceferino Namuncurá, ejemplo luminoso de santidad, venerado en todo el país, pero sobre todo en la Patagonia donde nació, orgullo de su raza, será quizás en el futuro propuesto a la veneración. Es el triunfo del amor, de la pureza, de la juventud. Ya Manuel Gálvez, en su libro *El santito de la toldería*, destacaba el significado profundo de que fuera un indígena el primer santo argentino.

Debo aludir también a lo que ocurre allá en el Norte, la vida esforzada de tobas, mocovíes, y matacos; en otros sitios, la de los tehuelches y los onas, los guaraníes o los collas. No quiero omitir a ninguna de las naciones que conforman las etnias nativas de nuestro territorio. Hablo de todas y para todas, para decir que sin su tradición, sin su presencia y sin el resguardo de sus derechos, la cultura nacional queda trunca, la integración del país, incompleta, y la unidad nacional, sin realizarse. Esta ley procura preservarla.

La ley no será por sí sola la solución para todos los problemas, pero debe surgir como un compromiso colectivo de concretar esta justicia demorada. Los propios indígenas serán los principales protagonistas. A nosotros nos toca considerar el aspecto legislativo, mientras que el Poder Ejecutivo tendrá la responsabilidad de instrumentar las acciones concretas y ejecutar las realizaciones prácticas para que la norma se convierta en acto y la doctrina legal en justicia concreta.

Los propios compatriotas indígenas, con la solidaridad de la íntegra comunidad nacional, deben ser los protagonistas principales para ayudar, en cuanto sea posible, al logro de estos altos objetivos.

En esta cuestión, señores senadores, está presente el principio de solidaridad y justicia que compartimos e impulsamos convencidos del ideal de la integración del país, ahora incompleta, y de la unidad del respeto a los derechos de los compatriotas indígenas y del desarrollo de su comunidad en la alta significación que tienen como parte de nuestra sociedad.

Que llegue desde aquí, como un saludo para todos nuestros compatriotas aborígenes, esta expresión de afecto y de igualdad: ¡Hermano indígena, estamos buscando la justicia para tu causa! (*Aplausos en las bancas y en las galerías*).

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. Bittel.** — Señor presidente, señores senadores: he escuchado con la más viva atención la exposición del señor senador por la Capital. Debo confesar que el proyecto lleva implícita la intención de hacer justicia con nuestros her-

manos aborígenes, que vienen sufriendo desde hace largo tiempo el olvido de quienes tienen la obligación de restañar heridas abiertas a través del tiempo. Nosotros hubiéramos querido tener el tiempo suficiente para hacer un análisis profundo y minucioso de este proyecto, porque, repito, nadie puede negar la muy buena intención de sus autores. A través de su lectura he podido advertir algunas cosas que me preocupan, y creo que tal vez este proyecto hubiera tenido que ser girado también a la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública.

Otro de los interrogantes que me formulo se relaciona con la referencia del señor senador por la Capital a tierras nacionales existentes en las provincias. Evidentemente, ello se debe a un error de información. En los diferentes estados federales, sobre todo en aquellos que fueron provincializados en los últimos tiempos, las únicas tierras nacionales resultan de expresas reservas realizadas por la Nación, como en el caso de Parques Nacionales y Gendarmería Nacional; pero no hay otras, porque con la provincialización de los territorios nacionales se transfirieron a las provincias todas las tierras de las que era titular la Nación.

**Sr. de la Rúa.** — ¿Me permite una aclaración?

**Sr. Bittel.** — ¡Cómo no, señor senador!

**Sr. de la Rúa.** — Piense usted que no sólo están en las provincias las tierras nacionales correspondientes a Parques Nacionales, sino también las que pertenecen a la Secretaría de Agricultura, a las Fuerzas Armadas, al Ministerio de Educación, las de zonas de frontera, por citar algunos ejemplos. La ley prevé la adjudicación de tierras en las que residen las comunidades, y si no las hubiere puede darse el caso de expropiación para colonización o adjudicación de tierras vecinas. Si las tierras son provinciales, deberán hacerse gestiones con la provincia a los efectos de su adjudicación. De modo que están contempladas todas las posibilidades. El principio básico es darle al indígena su tierra.

**Sr. Bittel.** — El señor senador no ha desmentido lo que yo acabo de afirmar. A lo que quiero llegar es a que este organismo que crea la ley, con un representante del Ministerio de Trabajo, uno del Ministerio de Economía, uno del Ministerio de Educación y Justicia, uno del Ministerio del Interior, uno de la Secretaría de Acción Cooperativa y uno del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, no cuenta con un representante de las provincias.

Voy a hablar con la experiencia que me da mi larga militancia política en el Chaco y mi amplio conocimiento de las comunidades aborí-



genes de esa provincia. En el Chaco hay tobas, mocovíes y maticos, distribuidos en toda su amplitud geográfica; incluso la provincia de Formosa tiene el mismo problema, con una población aborigen del orden de los 50 mil habitantes. Por su parte, la del Chaco es de 35 mil a 40 mil habitantes. En consecuencia, quiero reivindicar el derecho de las provincias a coparticipar en este organismo que ha de tener a su cargo tan alta misión como la de hacer justicia con las comunidades aborígenes.

Por supuesto, desde ya anticipo, para tranquilidad del señor senador, que la bancada justicialista, aunque hubiera querido que este proyecto fuera estudiado más minuciosamente, tiene conciencia también de que toda ley es perfecta y de que tal vez por su intención de hacer justicia a corto plazo el señor senador no accedió a nuestra requisitoria.

De cualquier manera quiero anticipar que nuestro bloque —que ha suscrito favorablemente el proyecto, pero no así algunas modificaciones de última hora que creo lo benefician— votará afirmativamente el proyecto en general, pero nos vamos a permitir hacer algunas sugerencias en el debate en particular.

Podría hablar largamente de este tema. Creo que el Chaco debe ser una de las provincias más experimentadas en el tratamiento del aborigen, ya que desde hace mucho tiempo —diría casi desde sus orígenes como provincia— tiene una dirección que se ocupa expresamente de ellos. Hay un pueblo que el señor senador León conoce muy bien, como conoce todo el Chaco, Quitilipi, que tiene una Asociación de Amigos del Aborigen. Se trata de un grupo de ciudadanos de distintas extracciones políticas que han dedicado mucho tiempo al estudio de los indígenas. Todos los 19 de abril realizan en esa ciudad chaqueña una feria artesanal, cuyo objetivo es no sólo exponer la artesanía aborigen sino también exaltar y poner a la consideración pública la reivindicación de estos seres humanos. Porque son seres humanos, de carne y hueso como nosotros, que lamentablemente durante muchos años fueron tratados poco menos que como animales.

Quiero señalar, como chaqueño y argentino que antes del advenimiento de Juan Domingo Perón los aborígenes del Chaco ni siquiera se inscribían en los registros civiles; eran prácticamente iguales al matico o al guasucho. Recién a partir de la irrupción en la República de Juan Domingo Perón se incorporan a la civilización y tienen acceso a los registros civiles.

Esta actitud del señor senador de la Rúa y de su bloque, al proponer un proyecto que tiene

la pretensión de jerarquizar al aborigen de todo el país, merece nuestro apoyo porque siempre hemos proclamado, a lo largo y a lo ancho de la República, que los aborígenes son nuestros hermanos.

Tengo el orgullo de decir que después del golpe de 1976 fui procesado por la revolución que abatió al régimen constitucional por haber sugerido el otorgamiento de un crédito del Fondo Unificado del Banco de la Provincia del Chaco por la fabulosa suma de 2.500 millones de pesos. Por eso me instruyeron un sumario. Uno de los gobernadores de facto de la provincia convocó a los aborígenes y les enrostró que no habían pagado su crédito en abril de ese año y les hizo un cargo porque tenían un interés privilegiado. Les preguntó por qué si el banco estaba cobrando un interés del 48 por ciento —estoy hablando de cifras de 1976—, ellos tenían que pagar el 30 por ciento.

Traigo este recuerdo para que el Senado de la Nación sepa que nuestra intervención y las observaciones al proyecto no se deben a que estamos en contra de una justa reivindicación de los aborígenes sino a que nos hubiera gustado profundizar más en el tema.

De cualquier manera, señor senador, reitero nuestro voto favorable al proyecto en general. Nos reservamos el derecho de discrepar en los aspectos que ya anticipé. Fundamentalmente voy a requerir, en nombre de nuestra bancada, algunas modificaciones en cuanto a la conformación del organismo de conducción, porque creo que es justo que las provincias que tienen comunidades aborígenes participen con la Nación en la instrumentación de una política en favor de nuestros indígenas, que ya no pueden ser postergados a través del tiempo por el olvido de los hombres. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasesco.** — Es simplemente, señor presidente, para agregar algo que considero importante y fundamental a las expresiones que han vertido tanto el señor senador De la Rúa como el señor senador Bittel.

Este proyecto de ley viene a cubrir un vacío legislativo importante, ya que por la ley 14.932 la República Argentina ratificó el convenio 107, "relativo a la protección e integración de las poblaciones tribales y semitribales en los países dependientes", de la Organización Internacional del Trabajo.

Como consecuencia de esta convención internacional ratificada por la Argentina, se nos observó nuestra conducta por violar los artículos

1º, 2º concordante con el 27 y con el 5º, los artículos 9º al 17 y los artículos 20 al 24 de dicha convención.

Este proyecto que hoy tratamos, de ser convertido en ley, va a traer como consecuencia que nuestro país cumplimente ante la Organización Internacional del Trabajo todas las observaciones que se le formularon oportunamente en las comisiones respectivas, circunstancia por la cual, señor presidente, voy a solicitar que se inserte en el diario de sesiones la copia del convenio 107.

—Asentimiento<sup>1</sup>.

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. León.** — Señor presidente: dije esta tarde en una reunión que esta ley es muy importante no sólo porque trata de curar una vieja herida de nuestra sociedad sino porque vamos a legislar sobre los hombres tal vez más postergados, más perseguidos y que han sufrido mayores injusticias a través de la historia de nuestro país.

Tengo la sensación de que no podríamos intentar la búsqueda de una sociedad más ética y de una democracia que se exprese como tal, como expresión cultural, si no hiciéramos de esta ley un compromiso moral.

No se trata de ver quién ama más al aborigen. Creo que todos los partidos políticos estamos en deuda con el aborigen. Yrigoyen les dio tierra antes de que Perón los llevara al Registro Civil, pero durante los gobiernos radicales, conservadores y peronistas continuaron sufriendo como seres humanos. Alguna vez a mí, que estoy hablando ahora de legislar sobre los hombres y no sobre las cosas, me pareció que veíamos en ese hermano una cosa que caminaba pero que no sentía: era como la expresión del paria. La civilización blanca y su rifle terminaron por diezmarlos, quedando parcelados en el seno de nuestra América.

Esto no es sólo observable en el marco de nuestro país, que enfocó según mi criterio en forma exhaustiva el discurso del señor senador por la Capital, al fundamentar su proyecto.

A veces pienso que el drama de nuestra América es el de todos nuestros aborígenes, postergados dueños de la tierra. En algunas ocasiones hablamos aquí de las victorias imperiales y de la presencia colonial, quizá sin descubrir que estábamos tocando la llaga del imperialismo y del colonialismo triunfante en América, que es declinante y amordaza al hombre marginado.

El pueblo de América se mezcla con esta sangre que fue dueña de civilizaciones que nos legaron hasta actitudes jurídicas y libros de medicina; luego, con el tiempo, fueron perdiendo tantas cosas que aparecieron postergados hasta de las más mínimas posibilidades de salud y de gozar de la justicia en el campo jurídico.

Quizá Túpac Amaru, tironeado y descuartizado, es el símbolo de un acto de contricción que tenemos que hacer los argentinos frente a esta raza humana que merece mucho más de lo que tiene.

Estoy muy feliz con este proyecto, porque como lo señaló el señor senador, nosotros los vemos de cerca, sabemos que algunos aborígenes no comen si no cazan o pescan; hemos visto cómo han sido explotados por algunos gerentes puestos por el ordenamiento político perverso, y todavía hoy podemos verlos en algunos obrajes cobrando en vales para después ser emborrachados en el almacén del propio dueño del obraje.

Frente a estos hechos todos reaccionamos. Los diputados del Chaco de la Unión Cívica Radical propusieron una ley que dio casa propia a los indios del barrio toba de Resistencia. Pero el proyecto que hoy estamos considerando —como lo señaló el señor senador por la capital— constituye el marco a partir del cual cada uno de nosotros tendrá que seguir legislando, perfeccionando y fundamentalmente saturándolo de humanidad. El esqueleto de una ley no servirá para nada si nuestros sentimientos no comprenden que el aborigen que luchó por nuestra independencia es un hombre que debe ser integrado a la sociedad.

Los indígenas han sufrido todas las injusticias del género humano. Considero correcto que en esta pretensión de sacar al país del campo de todas sus frustraciones nos acordemos de algunos de los olvidados de siempre.

En el frontispicio de la Universidad de México está grabada una frase referida al mundo americano —creo que pertenece a Vasconcelos—, que dice lo siguiente: "Por tu raza hablará mi espíritu".

Con este criterio doy mi voto y felicito a los autores de este proyecto porque quizá nuestra raza se perfeccione si el espíritu de la vieja raza americana se inserta en el marco de la sociedad más justa que debemos conseguir. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Leconte.** — Señor presidente: me adhiero, con breves palabras, al proyecto de ley que con

<sup>1</sup> Ver el apéndice.

tanta claridad y precisión ha fundamentado el señor senador por la Capital. Además lo quiero hacer sin ningún fin político inmediato, pues soy representante de una provincia en la que no hay comunidades indígenas localizadas y donde se logró el milagro, que debe ser ejemplar en el país, por el que la primitiva raza guaraní se integró con la raza blanca y le dio el sello de su cultura, de su idioma, aún vigentes en todos los sectores; le transmitió el espíritu de su música, que hoy actualizada rebasa los límites de nuestra provincia y aun del país.

He escuchado con atención todas las exposiciones. Creo que el país está en deuda con los indígenas de todos los rincones de la República, sin perjuicio del esfuerzo que cada sector político haya realizado en favor de los aborígenes desde el sitio que ocupara y en el momento histórico en el que le tocó la responsabilidad de la conducción de los gobiernos nacional o provinciales.

Conozco de cerca las penurias y esperanzas de los aborígenes porque mi padre inició su carrera docente como maestro de los indios en el Chaco, vivió en las tolderías, sufrió con ellos, les llevó la medicina y la educación y les inculcó el amor a la patria, y encontró en los aborígenes una materia humana de óptima calidad pero incomprendida, postergada, muchas veces castigada, y esa gente se fue extinguiendo en el país a pesar de los esfuerzos sucesivos.

Por ello resulta satisfactorio que en esta hora, que todos pretendemos que sea la del reencuentro, aportemos nuestro esfuerzo en la sanción de este proyecto, que sin duda tendrá el respaldo unánime para crear el instrumento político que permita tutelar y que brinde la herramienta necesaria para que ellos, con su capacidad y su esfuerzo, con su dignidad de hombres sufridos de nuestra tierra, puedan cumplir con su destino integrados a la Nación, trabajando organizados en su propia cultura, preservando lo que les viene desde las raíces mismas de América.

Al expresar mi adhesión al proyecto en tratamiento, quiero dejar formulado el respaldo a la iniciativa del señor senador Bittel, quien reclama con justicia la participación de los representantes provinciales en esta comisión, pues son protagonistas fundamentales en este quehacer común para acompañar al indio y brindarle las condiciones dignas que todos deseamos para ellos.

Con estas breves expresiones, en representación de los señores senadores de los partidos provinciales y en mi nombre, adelanto el respaldo a la iniciativa que estamos considerando, con la aclaración formulada por el señor senador por el Chaco. (*Aplausos.*)

**Sr. Presidente (Otero).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar en general.

—La votación resulta afirmativa. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Otero).** — En consideración en particular.

Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. Bittel.** — Teniendo en cuenta que se han formulado algunas modificaciones al despacho en consideración, solicito que por Secretaría se dé lectura previamente a cada uno de los artículos del dictamen.

**Sr. Leconte.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Leconte.** — Como aquí ya se ha aclarado perfectamente cuáles son las modificaciones propuestas por el miembro informante de la comisión y sólo existe una observación del senador Bittel con respecto a un artículo, creo que sería conveniente enunciar el número de los artículos que no plantean problemas y leer únicamente los que deban ser modificados.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Corresponde dar lectura a todos los artículos porque vamos a proponer otras modificaciones.

**Sr. Leconte.** — Si es así, estoy de acuerdo.

**Sr. de la Rúa.** — Antes de pasar a la consideración en particular, deseo hacer una aclaración respecto del nombre que se dará a esta ley, aunque no se trate de un punto que se ponga a votación. El dictamen de la comisión se refiere a la ley "sobre protección a los indígenas y apoyo a las comunidades aborígenes". En realidad, no se trata de brindar ninguna protección, sino de permitir la libre realización de esas comunidades. Por eso entiendo que el nombre de la ley debe ser "Política indígena y apoyo a las comunidades indígenas".

Quiero que quede constancia de esta aclaración y, si la comisión comparte este punto de vista, que se proceda en consecuencia.

**Sr. Bittel.** — No hay objeción que formular.

**Sr. Presidente (Otero).** — En consideración en particular.

Por Secretaría se dará lectura al artículo 1º, con las modificaciones introducidas por el señor senador por la Capital.

**Sr. Secretario (Macris).** — (*Lee:*)

#### 1. Objetivos.

Artículo 1º — Declárase de interés nacional la atención y apoyo a los aborígenes y a las comunidades o

tribus indígenas existentes en el país, y su defensa y desarrollo para su plena participación en el proceso socioeconómico y cultural de la Nación, respetando sus propios valores y modalidades. A ese fin, se implementarán planes que permitan su acceso a la propiedad de la tierra y el fomento de su producción agropecuaria, forestal, minera o artesanal en cualquiera de sus especializaciones, la preservación de sus pautas culturales en los planes de enseñanza y la protección de la salud de sus integrantes.

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. Bittel.** — Entiendo que podríamos agregar, luego de "agropecuaria, forestal, minera o artesanal", la palabra "industrial" ¿Podría ser aceptada esta modificación, senador de la Rúa?

**Sr. de la Rúa.** — No hay inconveniente.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Creo que es mejor decir "...industrial o artesanal".

**Sr. de la Rúa.** — En realidad, deberíamos hablar de "actividad industrial propia de las comunidades aborígenes".

**Sr. Rodríguez Saá.** — Comparto ese criterio, precisamente por lo que mencionó el señor senador de la Rúa cuando hizo referencia a la fábrica de ladrillos, que se trata de una actividad industrial.

**Sr. de la Rúa.** — Deberíamos referirnos a las industrias propias vinculadas con los modos o costumbres de trabajo de una tribu...

**Sr. Presidente (Otero).** — Se va a votar el artículo 1º, con la modificación propuesta por el señor senador por San Luis.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 2º

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — He propuesto el siguiente texto: "A los efectos de la presente ley, reconócese a las comunidades o tribus indígenas radicadas en el país personería jurídica, la que se adquirirá mediante la inscripción en el Registro de Comunidades Indígenas y se extinguirá mediante su cancelación."

**Sr. Leconte.** — Quiero formular una observación que apunta a la redacción y no al concepto del artículo. Entiendo que sería mejor la siguiente redacción: "A los efectos de la presente ley, reconócese personería jurídica a las comunidades o tribus indígenas radicadas en el país...", siguiendo luego el texto leído por el senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Estoy de acuerdo.

**Sr. Presidente (Otero).** — Se va a votar el artículo 2º, con la modificación propuesta por el señor senador por Corrientes al texto leído por el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 3º.

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Deseo hacer sólo una observación, señor presidente: donde dice "preexistencia y reagrupamiento", debe decir "preexistencia o reagrupamiento".

**Sr. Presidente (Otero).** — Con la modificación propuesta por el señor miembro informante de la comisión, se va a votar el artículo 3º.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 4º.

—Se lee el artículo 5º con modificaciones.

**Sr. de la Rúa.** — Lo que se ha leído no es el dictamen de la comisión sino la modificación que yo propongo.

**Sr. Sánchez.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Sánchez.** — En este momento se está tratando el proyecto en particular. Se debe leer el artículo tal como lo propone la comisión y luego las modificaciones que se consideren convenientes. Cuando el señor miembro informante hizo la fundamentación del proyecto anticipó las reformas que iba a proponer, pero no correspondía hacerlo sino en el tratamiento en particular.

**Sr. de la Rúa.** — Estrictamente hablando tiene razón el señor senador.

**Sr. Brasesco.** — Que se lea el artículo tal como lo propone la comisión.

**Sr. Presidente (Otero).** — Se procederá a leer el artículo tal como fue redactado por la comisión. Luego se propondrán las modificaciones.

—Se lee el artículo 5º.

**Sr. de la Rúa.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Pido que se lea por Secretaría la modificación que propongo.

**Sr. Presidente (Otero).** — Por Secretaría se dará lectura.

**Sr. Secretario (Macris). — (Lee):**

Artículo 5º — Créase la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas que actuará bajo la dependencia que establezca el Poder Ejecutivo. Deberá constituirse dentro de los 180 días y contará con un consejo asesor integrado por:

- a) Un representante del Ministerio de Trabajo;
- b) Un representante del Ministerio de Economía;
- c) Un representante del Ministerio de Educación y Justicia;
- d) Un representante del Ministerio del Interior;
- e) Un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa;
- f) Un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria.

Le corresponderá coordinar la acción de las distintas áreas de gobierno para el cumplimiento de la presente ley.

II. El Consejo Indígena estará constituido por representantes aborígenes, designados por la autoridad de aplicación entre quienes sean propuestos por los Consejos Indígenas Provinciales o, en su defecto, por los gobiernos de provincia. La reglamentación determinará el número y los requisitos con que deberán contar los representantes.

Al Consejo Indígena le corresponderá asesorar a la autoridad de aplicación en todo lo relativo a la política indígena nacional y sus relaciones con las comunidades aborígenes.

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. Bittel.** — Pretendo incluir un inciso, que sería el g), para que haya un representante de cada una de las provincias argentinas o de cada una de las provincias que tengan comunidades aborígenes. Esta es la primera modificación que sugiero al Honorable Senado.

En cuanto al Consejo Indígena, deseo hacer una propuesta al señor senador de la Rúa, en el afán de mejorar las cosas.

El Consejo Indígena estará constituido por representantes aborígenes, y si esto es así no entiendo el sentido que tiene su designación por la autoridad de aplicación entre quienes sean propuestos por los Consejos Indígenas provinciales o, en su defecto, por los gobiernos de provincia. Basta con que sean designados por los aborígenes. (*Aplausos en las galerías.*) Ellos están en condiciones de hacerlo como corresponde. Los representantes tienen que ser legítimos, sin posibilidad alguna de que se haga trampa. Esta historia la conozco desde adentro.

Muchas veces he escuchado comentarios sobre actitudes de los caciques. He respondido que son como nosotros los políticos, o como los dirigentes gremiales; es decir, tienen todas nuestras virtudes y también todos nuestros defectos.

Por eso digo que confiemos en ellos y los dejemos elegir sus representantes sin participación de la autoridad de aplicación. De lo contrario no se tratará de un representante del aborigen sino de quien mande en la provincia. Hagamos posible, señor senador, que en esta oportunidad sean auténticos y legítimos representantes de las comunidades aborígenes de todas las provincias argentinas. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Señor presidente: coincido con lo que ha expresado respecto del Consejo Indígena el señor senador por el Chaco. No ha hecho sino expresar lo mismo que nosotros sostenemos.

Es más: si se toman la molestia de leer nuestro proyecto originario encontrarán que el artículo 5º, inciso e), establecía que la representación se formaba de la siguiente manera: "cuatro representantes aborígenes en representación de las comunidades indígenas, designados cada tres años por el Parlamento Nacional Indígena, en sesión plenaria que se realizará con intervención del Ministerio de Salud y Acción Social para verificar su integración y decisión".

De manera que en nuestra idea inicial estaba la representación de los indígenas exclusivamente a través de su parlamento. Se celebraron sólo dos reuniones de este parlamento, y la razón para la modificación en el despacho es que no se han producido otras, por discrepancias aparecidas en él, y parece improbable una próxima reunión. De tal forma que nos encontramos con la dificultad de que habría sido necesario aguardar esa nueva improbable reunión, con lo cual se demoraría la participación e intervención de los indígenas en el Consejo. La idea ha estado presente todavía en la reforma que propuse en mi informe, pues agregó como último párrafo: "En su caso, la autoridad de aplicación considerará las recomendaciones que se formulen en parlamentos o congresos indígenas nacionales, representativos de las comunidades aborígenes". Con este texto y espíritu, podrán incorporarse representantes designados por el Parlamento Indígena. No hemos creído que esto pueda ser susceptible de digitación o de nombramientos que originen cualquier duda. En lugar de establecer que la autoridad de aplicación nombra directamente a los representantes indígenas, dicho acto debería concretarse entre quienes sean propuestos por los consejos indígenas provinciales, dando por entendido que hay una representación reconocida en cada provincia. En donde no existieren estos consejos provinciales, que sea a propuesta de los gobier-

nos de provincia, porque también así integramos la participación provincial y aventamos toda sospecha.

No pensamos en el color político del gobierno que lo propone, sino en la posibilidad de que las comunidades aborígenes de esa provincia designen e indiquen a las personas que serán sus representantes. De todos modos, se trata de un aspecto importante pero formal en la ley, y debe ir demostrándose en la práctica cuál es el grado y el modo de su mejor funcionamiento. Por ese motivo ni siquiera fijamos el número de sus miembros. En el proyecto original hablábamos de cuatro. También recibimos consejos para que fueran seis. Sin embargo, puede haber así quienes se sientan excluidos, se trate de naciones o provincias, de tribus o comunidades. Por eso dejamos librado a la reglamentación la determinación del número y de los requisitos mínimos para integrar el Consejo, destacando que esto se hará de acuerdo con el espíritu de la ley. Por eso hemos contemplado la incorporación de una comisión nacional "con participación indígena", principio que no debe descuidarse en su aplicación. Por esta razón comparto la idea de que sean los indígenas quienes designen a sus representantes.

Ahora bien, el problema reside en la forma en que se proceda porque, a menos que el señor senador sugiera otro modo, no sé cómo podríamos hoy convocar para una elección general a todos los indígenas a quienes se refiere esta ley. En ausencia de un parlamento representativo de todas las comunidades nos encontramos con esta dificultad. Cuando ese parlamento se reúna podrá ser modificado ese artículo, pero mientras tanto, el principio que debe regir es el de la representación a que aludí. En donde dice que "la autoridad de aplicación designará", es sólo para cumplir con el acto administrativo, a los efectos del nombramiento.

Si a esta altura de las circunstancias encontramos otra forma de efectuar la designación, sería bienvenida. Pero la propuesta recoge un principio de autenticidad de la designación. Justamente, hablamos con el senador Saadi acerca de que esto no debía convertirse en un acto de digitación y, teniéndolo en cuenta, propuse este sistema. De modo, señor senador por el Chaco, que nos queda planteado un interrogante acerca de si determinamos alguna otra forma en que conviene proceder o si dejamos este sistema como transitorio.

En cuanto a la participación de los gobiernos de provincia, en nuestro bloque estamos de acuerdo. No creo que debamos obligar a las provincias a participar de este Consejo. Estimo

que encontraríamos una solución satisfactoria para todos si se permitiera que las provincias que cuenten con comunidades indígenas participaran de las reuniones o de la tarea de coordinación. A tales efectos se incorporaría una redacción adecuada.

En otro punto se menciona que la política deberá coordinarse con los gobiernos provinciales; además, los gobernadores, como agentes naturales del gobierno nacional, cumplirán tareas de coordinación.

No queremos crear la burocracia excesiva ni un gran gasto administrativo en el sentido de que cada provincia deba designar un delegado que necesite residir en Buenos Aires permanentemente, pero sí buscamos una manera de coordinación fluida. Sería adecuado que las provincias tuvieran la facultad de enviar a sus representantes cuando lo desearan, para asistir a las reuniones del Consejo de Coordinación. Creo que esto constituiría un reconocimiento de sus derechos en este campo.

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. Bittel.** — Insisto en que debe estar representada la provincia porque, de lo contrario, habrá un problema de coordinación. Usted no se preocupe, señor senador, por los gastos que ello pudiera acarrear.

Yo no sé si Formosa tiene o no una Dirección del Aborigen; el Chaco la tiene. Es decir que no habría que proceder a una designación, porque el director del aborigen puede integrar este organismo. Habría un representante por cada provincia que tenga comunidad aborigen.

En cuanto a lo otro, señor senador, no hay una actitud demagógica. Entiendo que la redacción debe especificar que el Consejo Indígena estará constituido por representantes aborígenes designados por las comunidades aborígenes de cada una de las provincias. Tal vez yo me guíe por la perspectiva propia de mi provincia. En el Chaco, como esta organización viene desde lejos, los aborígenes están en condiciones de elegir a sus representantes: ya funciona una forma de representación de los aborígenes en el trato con el gobierno provincial. La redacción que proponga implica jerarquizar realmente la representación, y me parece que va a funcionar bien. Por ejemplo, supongo que en el Chaco, donde hay tres grupos definidos —tobas, maticos y mocovíes—, habrá un representante por cada uno de los grupos. En otras provincias tampoco habrá dificultades. Si ellas se presentan, bastará convocar a las comunidades para que resuelvan.

Creo que esta propuesta perfeccionará la ley en el sentido de una mayor representatividad, no cayendo en los errores del pasado. Los aborígenes tienen un legítimo derecho a representarse por sí mismos; ellos van a ser los mejores abogados de sus propios intereses.

**Sr. de la Rúa.** — Por mi parte, acepto esta propuesta, señor presidente. Habrá que buscar la mejor manera de llevarla a la práctica, pero coincido.

**Sr. Bittel.** — La parte final queda tal cual: "La reglamentación determinará el número y los requisitos mínimos con que deberán contar estos representantes".

**Sr. de la Rúa.** — Está bien.

**Sr. Bittel.** — De este modo, la ley dará legitimidad representativa a los aborígenes de todo el país.

**Sr. de la Rúa.** — Le agradezco mucho, señor senador, porque ésta era la fórmula que estábamos buscando.

**Sr. Presidente (Otero).** — Por favor, no dialoguen los señores senadores.

Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor presidente: estamos de acuerdo sobre la forma de designar a los representantes aborígenes. Voy a proponer que este ente descentralizado, la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, no se divida en dos comisiones. En efecto, se forma un Consejo de Coordinación, que tiene todas las facultades ejecutivas de la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, y en el cual no tienen participación los aborígenes; y además hay un Consejo Indígena, en el que tienen participación los aborígenes, pero solamente a los fines de asesorar a la otra comisión. De manera que, si bien aparentemente los aborígenes participan y están representados, solamente cumplen el papel de asesores. En consecuencia, se va a dar el caso de que, por un lado, los aborígenes estarán en las reuniones, pero solamente los que no lo sean van a votar y ejecutar las decisiones. Los principales y directos interesados se limitarán a asesorar, y temo que algunas veces ese asesoramiento no sea escuchado. (*Aplausos en las galerías.*) Entonces, propongo que en este aspecto se vuelva al texto propuesto originariamente, en el sentido de que se cree la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas, con la forma de participación que se ha sugerido, y que no se divida en Consejo de Coordinación y Consejo Indígena, de modo que haya un solo órgano de aplicación de la ley que tenga todas las facultades. Entonces sí podremos decir

que sólo los aborígenes salvarán a los aborígenes. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Otero).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — El proyecto originario que presenté con los senadores León, Sigal, Mazzucco y Velázquez establecía sólo un Consejo Asesor. Lo que sucede es que quisimos darle realce a la institución del Consejo Indígena, lejos de querer disminuir sus facultades o su presencia. Este consejo tendrá una gran fuerza de representación. No se trata sólo de un organismo asesor sino que cumple también funciones de control. El otro consejo tiene la finalidad de coordinar rápidamente las acciones que deban realizarse, de modo que cada uno de los funcionarios delegados lleve a su ministerio las directivas correspondientes.

Está sobreentendido que a las reuniones de la comisión concurren ambos consejos, el de Coordinación y el Indígena. Tal vez pudiera ser que el Consejo Indígena participara de todas las reuniones de la comisión. De todos modos, éste es un problema de inteligencia de la ley. Puede ocurrir que no se comprenda bien el texto que he propuesto; a veces uno se enamora de sus propias obras y no advierte los defectos que otros, con mejor perspectiva, pueden apreciar.

Si se considera que es mejor suprimir la división y establecer un Consejo Asesor, poniendo juntos a los que coordinen y a los que representen a los indígenas, puede estar bien. Lo que nosotros queremos es eficacia, por la presencia de los representantes de otros ministerios para que no se demoren las decisiones, y participación indígena a través de la representación genuina. La mejor forma de lograrlo puede ser dividiendo los puntos primero y segundo o no haciéndolo. Si a los señores senadores les parece que podemos suprimir eso y establecer la comisión con un Consejo Asesor integrado por todas esas representaciones, quedarían juntos los representantes de los ministerios, de las provincias y de los aborígenes.

La redacción podría ser de la siguiente manera: contará con un consejo integrado por un representante de los ministerios de Trabajo, de Economía, de Educación y Justicia, del Interior y de las provincias, al que le corresponderá coordinar la acción de las distintas áreas de gobierno para el cumplimiento de la presente ley. Pero así no sale bien la redacción. Por eso la duda y la dificultad frente a lo que se propone.

**Sr. Presidente (Otero).** — El señor senador Rodríguez Saá pidió la palabra. Sugiero que a continuación pasemos a un breve cuarto intermedio.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Yo voy a proponer una redacción para este artículo.

El realce, el prestigio y la importancia de la comisión se ven concretados con esta correcta reforma del texto, y se ha convertido a la comisión en una entidad descentralizada. Esto le permitirá moverse con más soltura, prestigio y realce que si no lo fuera.

El texto que propongo para el artículo 5º es el siguiente. La primera parte queda como está. Se suprime la frase "contará con un Consejo de Coordinación y un Consejo Indígena". Y se pone: "Se integrará: a) con un representante del Ministerio de Trabajo; b) con un representante del Ministerio de Economía; c) con un representante del Ministerio de Educación y Justicia; d) con un representante del Ministerio del Interior; e) con un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa; f) con un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria." El punto g) quedaría redactado en la forma que propuso el señor senador Bittel, y que fue aceptada. A continuación diría: "h) los representantes aborígenes —volvemos al texto originario— de las comunidades indígenas...", que serán designados en la forma que se convino. Y terminaría diciendo: "La reglamentación determinará el número de requisitos mínimos con que deberán contar estos representantes". A lo que yo agregaría: "...de manera que los representantes indígenas sean mayoría en la comisión".

**Sr. Presidente (Otero).** — Reitero mi sugerencia de pasar a un brevísimo cuarto intermedio en las bancas para que los señores senadores den forma final a la redacción del artículo 5º.

**Sr. Saadi.** — Propongo que se acepte la sugerencia de pasar a un breve cuarto intermedio.

**Sr. Presidente (Otero).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar la moción de pasar a cuarto intermedio.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Otero).** — Invito a los señores senadores a pasar a un breve cuarto intermedio en las bancas.

—Son las 22 y 21.

—Ocupa la Presidencia el señor vicepresidente 1º del Honorable Senado, senador Ramón A. Araujo.

—A las 22 y 32.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Continúa la sesión. Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — El señor senador por el Chaco va a informar acerca de este tema.

**Sr. Bittel.** — El artículo 5º quedaría redactado de la siguiente forma: "Créase la Comisión Nacional de Asuntos Indígenas como entidad descentralizada con participación indígena, que dependerá en forma directa del Ministerio de Salud y Acción Social. El Poder Ejecutivo designará a su titular y deberá constituirse dentro de los 90 días de la vigencia de la presente ley. Contará con un Consejo de Coordinación y un Consejo Indígena.

I. — El Consejo de Coordinación estará integrado por: a) Un representante del Ministerio de Trabajo; b) un representante del Ministerio de Economía; c) un representante del Ministerio de Educación y Justicia; d) un representante del Ministerio del Interior; e) un representante de la Secretaría de Acción Cooperativa; f) un representante del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria; g) un representante por cada una de las provincias que adhieran a esta ley; h) un representante del Consejo Indígena".

"Le corresponderá coordinar la acción de las distintas áreas de gobierno para el cumplimiento de la presente ley."

"II. El Consejo Indígena estará constituido por representantes aborígenes designados por las comunidades aborígenes. La reglamentación determinará el número y los requisitos con que deberán contar los representantes."

"Al Consejo Indígena le corresponderá asesorar a las autoridades de aplicación en todo lo relativo a la política indígena nacional y a sus relaciones con las comunidades aborígenes."

**Sr. de la Rúa.** — En lugar del último párrafo que acaba de señalar el señor senador, corresponde el siguiente: El Consejo Indígena ejercerá funciones de asesoramiento y control sobre la ejecución de las políticas indígenas y las relaciones con las comunidades aborígenes.

En su caso, la autoridad de aplicación considerará las recomendaciones que se formulen en parlamentos o congresos indígenas nacionales, representativos de las comunidades aborígenes.

**Sr. Bittel.** — Con las modificaciones propuestas, así quedaría redactado el artículo 5º.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 5º con las modificaciones propuestas.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 6º.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Señor presidente: propongo el siguiente agregado al inciso d) del artículo 6º:



"Las resoluciones del Comisionado Nacional relativas a la inscripción de las comunidades o tribus, así como a su cancelación, serán apelables ante la Cámara Federal del lugar dentro del plazo de diez (10) días".

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 6º con el agregado propuesto por el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a leer el artículo 7º del dictamen con las modificaciones introducidas por el señor senador por la Capital.

**Sr. Secretario (Macris).** — *(Lee):*

Artículo 7º — Dispónese la adjudicación en propiedad a las comunidades o tribus indígenas existentes en el país, debidamente inscritas, de tierras aptas y suficientes para la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal según las modalidades propias de cada comunidad. Las tierras deberán estar situadas en el lugar donde habita la comunidad o, en caso necesario, en las zonas próximas más aptas para su desarrollo. La adjudicación se hará prefiriendo a las comunidades que carezcan de tierras o las que tengan insuficientes; podrá hacerse también en propiedad individual, a favor de indígenas no integrados en comunidad o tribu, prefiriéndose a quienes formen parte de grupos familiares.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Propongo el siguiente agregado al final de este artículo: "La autoridad de aplicación atenderá también a la entrega de títulos definitivos a quienes los tengan precarios".

Asimismo, debe suprimirse la expresión "que" en la frase "...carezcan de tierras o las que tengan insuficientes", quedando redactado así: "...carezcan de tierras o las tengan insuficientes".

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 7º con las modificaciones propuestas por el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 8º.

—Se lee el artículo 9º.

**Sr. Menem.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Propongo a la comisión que la expresión "créditos especiales" de este artículo se cambie por "créditos preferenciales", para marcar más el espíritu del proyecto en el sentido de otorgar un beneficio, pues últimamente

ha ocurrido que algunas líneas de créditos especiales han constituido verdaderos "salvavidas de plomo".

Por lo expuesto, repito, propongo que se cambie "créditos especiales" por "créditos preferenciales".

**Sr. de la Rúa.** — La comisión acepta la modificación propuesta.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 9º, con la modificación propuesta por el señor senador Menem, y aceptada por la comisión.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Por Secretaría se va a dar lectura al artículo 10 con las modificaciones propuestas.

**Sr. Secretario (Macris).** — *(Lee):*

Artículo 10. — Las tierras adjudicadas deberán destinarse a la explotación agropecuaria, forestal, minera, industrial o artesanal, en cualquiera de sus especialidades, sin perjuicio de otras actividades simultáneas. La autoridad de aplicación asegurará la prestación de asesoramiento técnico adecuado para la explotación y para la promoción de la organización cooperativista de las actividades. El asesoramiento deberá tener en cuenta las costumbres y técnicas propias de los aborígenes, complementándolas con los adelantos tecnológicos y científicos.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 10, tal como se ha leído por Secretaría.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 11.

**Sr. Menem.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Pienso que hay que aclarar un poco el texto de este artículo.

En primer término, creo que los que se inscriben son los bienes; es decir, se constituyen los inmuebles como bienes de familia y no los títulos de propiedad.

En segundo lugar, la constitución como bien de familia de un inmueble, de acuerdo con la ley 14.394, ya los hace inembargables e inejecutables, por lo cual estimo que hay una redundancia.

En tercer término, quiero plantear una duda. ¿Qué sucede con los bienes que se adjudican a las comunidades y no a los individuos? No sé si interpreto bien el texto, pero en el artículo 7º se habla de bienes que se adjudican a la comunidad como persona jurídica y de otros bienes

que se adjudican en forma individual a favor de los indígenas. Con estos últimos no hay problema; en cambio, con los otros existiría una suerte de incompatibilidad con lo dispuesto por la ley 14.394, que no contempla ese tipo de inscripciones. No sé si corresponderá una aclaración del miembro informante de la comisión.

**Sr. de la Rúa.** — La idea de la comisión y del proyecto es que en ambos casos los bienes resulten inembargables e inejecutables.

El artículo 7º prevé que las tierras podrán darse en propiedad individual para ciertas situaciones de excepción, en cuyo caso hay también razones para que sean inembargables e inejecutables, porque se trata de atender a necesidades insoslayables de justicia para los indígenas.

Es cierto que hay una suerte de redundancia, pero es más aparente que real. Queremos reafirmar la inembargabilidad e inejecutabilidad de las tierras. La inscripción como bien de familia refuerza ese concepto y tiene algunos efectos adicionales; esto es así para que quede constancia en el Registro de la Propiedad de tal carácter.

Estoy de acuerdo con que son los inmuebles y no los títulos los que se inscriben como bienes de familia; pero en los títulos deberá hacerse constar esa condición. Aceptando la sugerencia del senador Menem, deberíamos suprimir la frase "los títulos de propiedad". La redacción debería ser: "Las tierras que se adjudiquen en virtud de lo previsto en esta ley son inembargables e inejecutables. Se inscribirán como bienes de familia, conforme a la ley...", continuando el texto anterior.

**Sr. Menem.** — Queda pendiente la otra observación que formulé. La ley 14.394 dice que no podrá disponerse de estos bienes, salvo que sean desafectados. ¿Eso habría que interpretarlo en función de la indisponibilidad por el término de veinte años?

**Sr. de la Rúa.** — Esto es distinto porque, sin perjuicio de la desafectación, aquí se establece un plazo de veinte años para preservar el sentido con que se hace la adjudicación a la comunidad o tribu. Después de los veinte años existe libre disponibilidad.

Quiero dejar bien en claro que la tierra no se adjudica por veinte años; se adjudica un dominio libre y completo, sólo que se establece una prohibición de enajenar por el término de veinte años, para asegurar su mantenimiento como patrimonio de la comunidad y su paso a las sucesivas generaciones. Entonces ésta es una regulación autónoma distinta de la que prevé la ley 14.394 de "bien de familia". Me parece que am-

bas figuras se complementan y así se refuerza el sentido de la ley.

**Sr. Bittel.** — Entonces, cuando se asegura la prohibición de enajenar por un plazo de veinte años, ¿eso no está en relación con la ley 14.394, sino que se establece una restricción al dominio?

**Sr. de la Rúa.** — Es un plazo autónomo para que, adjudicada la propiedad a la comunidad, ésta no sea víctima de una maniobra de especulación y privada de la tierra que se le adjudicó. Es entonces una medida de resguardo para que se cumplan los fines de la ley. No hay que olvidar que también se prevén planes de alfabetización, educación y asistencia médica que irán alcanzando sus efectos en el tiempo. Por eso se fija un plazo, después del cual la comunidad podrá disponer con todas las seguridades sobre el dominio que recibe en plenitud.

**Sr. Bittel.** — La experiencia me dice que lo que se establece en este artículo es una previsión aconsejable.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Acepto la propuesta del señor senador por la Capital en cuanto dice solamente que "se inscribirán". No alude a los títulos de propiedad sino que dice directamente "se inscribirán como bienes de familia, conforme a la ley 14.394 y concordantes".

Yo propongo que a continuación se diga: "...y en los títulos respectivos se hará constar la prohibición de su enajenación durante un plazo de veinte años a contar de su fecha".

**Sr. de la Rúa.** — Estoy de acuerdo.

**Sr. Menem.** — Por otra parte, quiero dejar constancia de que va a haber problemas para esa inscripción como bien de familia en los casos en que la adjudicación se haga a las comunidades, ya que la ley no prevé esa posibilidad. Tal vez por vía de la reglamentación se pueda establecer un procedimiento a esos fines.

**Sr. de la Rúa.** — No puede haber problemas porque esta ley lo manda.

**Sr. Menem.** — Pero no se compatibiliza con lo que ya está establecido, toda vez que no se prevé el procedimiento a seguir en esos casos.

**Sr. de la Rúa.** — De acuerdo, pero habiendo una ley frente a otra ley, ambas mandan.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 11, con las propuestas de modificación formuladas por los señores senadores por La Rioja y por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 12.

**Sr. Presidente (Araujo).** — En consideración el artículo 13.

**Sr. Secretario (Macris).** — Sobre el dictamen de la comisión se ha propuesto la supresión del primer párrafo.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Voy a solicitar que se suprima la primera parte del artículo 13, donde se dice: "En caso de incumplimiento grave de las obligaciones establecidas, la autoridad de aplicación podrá disponer, previo sumario en que se asegure la defensa, que el dominio de las tierras adjudicadas se retrotraiga a la Nación, sin otra indemnización que el pago de las mejoras útiles introducidas".

Recién se ha dicho que la adjudicación de tierras puede ser a particulares o a la comunidad en su conjunto. Entiendo que el incumplimiento grave es un delito y, como tal, no puede ser cometido por una sociedad, sino por personas de existencia visible. Es el hombre quien comete delitos. De manera que el caso se refiere a personas en particular. Si se decía recién que se transfería el dominio pleno, libre y completo, no comprendo por qué debe existir esta especie de espada de Damocles sobre cada uno de los adjudicatarios. En otras palabras, si se portan mal, serán castigados con la pérdida de la tierra.

Esta es una condena que no existe en el Código Penal. Es agregar una más, y pido que respetando el principio de igualdad se los trate como a los ciudadanos comunes. Si un ciudadano común adquiere una tierra en propiedad, no se le puede quitar por el hecho de que se porte mal. (*Aplausos en las galerías.*) En todo caso habrá que hacer un juicio, y si surgen responsabilidades patrimoniales el juez, tal como lo hace con cualquier otro ciudadano, podrá exigir un resarcimiento; si el individuo no lo puede abonar aquél recaerá sobre la tierra. Por lo tanto, suprimir el párrafo que he indicado sería de estricta justicia y respetuoso de la igualdad.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — En mi exposición general había propuesto la supresión de ese párrafo, de manera que hay total coincidencia. Bastaba recordar que ya lo había advertido.

Es común encontrar en las leyes de colonización normas que facultan para controlar que las tierras adjudicadas se destinen a la finalidad del plan respectivo. De todas formas, la supresión

del párrafo contribuirá a dar más claridad a la intención, sin perjuicio de que la autoridad de aplicación verifique que se cumpla con el sentido de la adjudicación, que es servir a la promoción, preservación y apoyo a la comunidad o tribu beneficiaria. Se trata con esto de hacer sentir verdaderamente el significado de la ley y la ayuda que se pretende dar. Pero, repito, ya había propuesto la supresión del párrafo, y pongo de manifiesto la coincidencia que expone el señor senador.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Aquí habría que hacer una aclaración. Donde dice: "En caso de extinción de la comunidad o tribu o cancelación de su inscripción, las tierras adjudicadas pasarán a la Nación, pero la autoridad de aplicación podrá adjudicarlas total o parcialmente a los grupos familiares subsistentes...", entiendo que se está refiriendo al caso de la adjudicación a la comunidad. Porque si se trata de adjudicaciones individuales, la extinción de la comunidad no puede hacer perder el derecho de propiedad al individuo. Por eso propongo que, donde dice: "En caso de extinción de la comunidad o tribu o cancelación de su inscripción...", después de las palabras "las tierras adjudicadas" se agregue "a ellas", de manera que la redacción final sería así: "En caso de extinción de la comunidad... las tierras adjudicadas a ellas pasarán a la Nación...". De esta forma se remarca que se refiere al caso de la adjudicación a la tribu o comunidad.

Mi segunda propuesta se refiere al miembro que se retira de las tierras. Quisiera poner de manifiesto que no debe tratarse del mero retiro sino del abandono. Sugiero el siguiente texto: "El miembro de una comunidad o tribu adjudicataria de tierras que las abandone no podrá reclamar ningún derecho...". Se destacaría así que lo que se sanciona es el abandono y no el mero retiro.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Este es un concepto fundamental en la ley y tiene que ver con la figura del condominio; se refiere al desmembramiento que —bajo forma de condominio— implica el retiro de uno de los integrantes condóminos. Para evitarlo se da esta otra solución. Quien está en la comunidad y se mantiene en ella goza de los beneficios de la propiedad común, mientras que quien se va no se lleva nada y la propiedad permanece inalterable en la titularidad de la comunidad o tribu. La figura del que se retira de ella es la de abandono, es la de quien renuncia

a esa comunidad, la de quien no sigue perteneciendo a ella. Esto, sin perjuicio de que la misma comunidad después vuelva a acogerlo en su seno, según sus normas. En el proyecto se habla en alguna parte de reagrupamiento de comunidades dispersas. Si la redacción queda más clara con la figura de abandono, de acuerdo, acepto la propuesta formulada por el señor senador Menem, aunque es lo mismo.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 13 con la modificación propuesta por el señor senador por La Rioja.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 14.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

**Sra. Malharro de Torres.** — Lamentablemente, el proyecto no ha pasado por la Comisión de Educación.

No me cabe duda de que el apoyo a estas comunidades indígenas deberá empezar por aquello que siempre se les negó en este país y que es la integración al sistema total de educación nacional, sin discriminaciones.

Avalando esta idea propondré algo acerca de lo que ya conversé con el señor senador de la Rúa. A continuación de "comunidades indígenas", el artículo 14 quedaría redactado así: "...contemplando la implementación de campañas intensivas de alfabetización para adultos y la creación de escuelas hogares y de servicios educativos en todos los niveles de enseñanza en las comunidades indígenas". (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Acepto la propuesta de la señora senadora por Mendoza y reitero la modificación que adelanté en mi exposición, en general. En donde dice "la autoridad de aplicación coordinará con el Ministerio de Cultura y Educación y con los gobiernos provinciales", debe decir "la autoridad de aplicación coordinará con el ministerio respectivo y con los gobiernos provinciales".

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 14 con las modificaciones propuestas por la señora senadora Malharro de Torres y por el señor senador de la Rúa.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee y aprueba el artículo 15.

—Se lee el artículo 16.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Había propuesto la siguiente redacción que tiende a reemplazar el texto donde dice: "resguardar la tradición oral y artesanal", para poner más explícitamente: "resguardar la tradición histórico cultural", de acuerdo con lo que dice también el artículo 1º. De modo que quedaría redactado así: "En la enseñanza se deberá resguardar la tradición histórico cultural de cada comunidad indígena, sus juegos y deportes y el aprendizaje del cultivo de la tierra con el conocimiento de las técnicas modernas, procurando habilitar y mantener granjas o huertas escolares. Se promoverá la difusión de la historia aborígen y poscolombina y la enseñanza y práctica del cooperativismo".

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Deseo proponer una modificación. En el último párrafo, en donde dice "se promoverá la difusión de la historia aborígen y poscolombina y la enseñanza y práctica del cooperativismo", solicito que se exprese: "Se promoverá la difusión de la historia argentina y la enseñanza y práctica del cooperativismo". A mi entender, no existe una historia aborígen ni una historia poscolombina. Creo que la esencia y que el ser nacional nacen cuando se fusionan tres elementos: el español, con la cruz de Cristo y el idioma castellano, el aborígen y la geografía. Como dije, en ese momento nace el ser nacional para la historia argentina. Por este motivo entiendo que debe incluirse la expresión "historia argentina". Estudiaremos la historia aborígen, como dice acá, y vamos a estudiar también la participación de nuestros hermanos, los indios, en la campaña libertadora y todo lo que hicieron por la conformación de esta patria grande. Por eso no podemos hacer una distinción entre una historia aborígen y una historia no aborígen. La historia argentina es tanto aborígen como poscolombina.

**Sr. de la Rúa.** — Todos estamos de acuerdo en que la enseñanza de la historia argentina es básica en los planes de educación. Lo que aquí se ha querido decir es que debe darse a los indígenas la posibilidad de acceder al conocimiento de la historia propia, de su raza, que a veces es anterior al nacimiento de nuestra Nación, de la Nación Argentina. (*Aplausos en las galerías.*) Esta es la razón del texto, señor presidente. No se trata de excluirlos de la historia argentina sino de remarcar que en los planes de enseñanza se arranque desde los orígenes mismos del solar nativo, de la vida que protagonizaron las razas que habitaban esta tierra. Es con este sentido prác-

tico que está redactado el texto, y sugiero que lo mantengamos en esa inteligencia, sin perjuicio de que el contenido del estudio de la historia argentina sea establecido por los planes comunes de enseñanza.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Sánchez.** — Señor presidente: comparto el criterio del señor senador por San Luis. En cualquier texto de historia, sea del ciclo primario o del secundario, se comienza estudiando a los aborígenes, su cultura y todo lo relacionado con la vida de los pueblos precolombinos, no sólo de nuestro país sino de toda América. En consecuencia, en la expresión "historia argentina" está implícita la historia aborígen de América y, por lo tanto, de nuestro país.

**Sr. Presidente (Araujo).** — ¿Acepta la modificación la Comisión?

**Sr. de la Rúa.** — Propongo que se mantenga el texto originario, señor presidente (*aplausos en las galerías*) y que recojamos la sugerencia del señor senador por San Luis y lo que ha indicado el señor senador por La Rioja, que es un notorio y prestigioso maestro, como fuente interpretativa. De todos modos, estamos señalando aquí los contenidos más amplios de la enseñanza.

**Sr. Sánchez.** — Lo que pasa es que si hacemos estas divisiones parece que tratamos sobre un pueblo diferente al nuestro. Y no es así. El pueblo aborígen de América es nuestro pueblo. Somos todos hijos de este suelo. Por lo tanto, la historia comenzó a escribirse con las comunidades indígenas que han dejado a través del tiempo su cultura, sus costumbres y su lengua. Eso está incluido, reitero, en los programas de historia. Si hiciéramos una discriminación estaríamos hablando de un pueblo distinto dentro de nuestro pueblo, como si en nuestro país no sólo se hubiese sometido a los aborígenes sino que también se los hubiese tenido marginados, como si no fuesen una parte de nuestra comunidad nacional. Tenemos, sí, que respetar sus costumbres, que vienen de sus ancestros, y su cultura, pero no debemos olvidar que forman parte de nuestro pueblo y de nuestra historia. Por lo tanto, esto sería dividir la historia en dos aspectos, con un pueblo que aparentaría ser diferente a otros, que existen dentro del mismo país. Y no es así; la historia se ha escrito desde el aborígen hasta nuestros días. Esa es la historia argentina. No podemos, entonces, hacer esta distinción, que en alguna medida nos coloca en la situación de estar haciendo discriminaciones, lo que no existe en el espíritu de nuestro pueblo.

Más allá de los errores cometidos, la historia de la patria se ha escrito con la participación de todos, contribuyendo a ello el indígena que se mezcló con el español y dio otra raza y el indígena puro, que también participó en la campaña libertadora y en el quehacer nacional. Desgraciadamente, por la ambición de los hombres que vinieron con las distintas corrientes inmigratorias, fueron sometidos y despojados de sus derechos y propiedades. Recién con este proyecto se les pretende restituir lo que fue de ellos, lo que les corresponde por derecho propio, como seres humanos fundamentalmente y como hombres de la tierra después.

Hay una sola historia, la argentina, la americana. La situación de los descendientes de nuestros aborígenes, de los primitivos habitantes de la Argentina, es igual a la de otros pueblos de América. Si hiciéramos esta distinción, estaríamos colocándonos en la posición segregacionista. De modo que también por lo que se refiere al espíritu nacional tenemos que hablar de la historia argentina, donde estamos todos.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chubut.

**Sr. Sigal.** — Estoy de acuerdo en que hay una sola Argentina. Lo que se pretende aquí es ahondar en la historia nativa del país para preservarla. No queremos que se pierda la lengua indígena, lo que está ocurriendo en muchas de las tribus argentinas. Eso se observa, por ejemplo, en el Chubut con las tribus tehuelches. Si no nos ocupamos en forma personal y visitamos algunas reservaciones, les aseguro, señores senadores, que en muy poco tiempo se perderá la cultura nativa. A través de este proyecto pretendemos profundizar en ella para que persista en el tiempo. (*Aplausos.*)

**Sr. Rodríguez Saá.** — Eso está en la primera parte.

**Sr. Sánchez.** — Señor presidente: en la ley está perfectamente determinado que el ciclo primario se impartirá en dos etapas. En la primera, que comprenderá tres años, la enseñanza se impartirá en la lengua indígena materna, es decir que la estamos preservando y rescatando. Asimismo, se dictará como materia especial el idioma oficial, el castellano. En la segunda etapa, que comprenderá los siguientes años hasta la finalización del ciclo primario, la enseñanza será bilingüe. De esta manera, no sólo se preserva la lengua indígena sino que también se la va enriqueciendo y se le va dando el relieve que realmente tiene. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

**Sra. Malharro de Torres.** — Señor presidente: yo apoyo la redacción de este artículo tal como está.

Legislar en favor de estas comunidades es ayudarlas a que restituyan su identidad.

No quiero entrar esta noche en un debate sobre la historia argentina, el que vamos a tener que hacer algún día en este país para que verdaderamente tengamos conciencia de nuestra identidad. Esto sólo podrá hacerse en la medida en que estas comunidades primigenias dueñas de esta tierra conozcan su historia y se afirmen en ella. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Señor presidente: no se trata de una discriminación sino de una complementación. Pienso que los compatriotas indígenas tienen derecho a acceder al conocimiento de su propia historia; no la historia aborígen como se enseña en la escuela común, en la que se dan sólo algunas noticias sobre lo que había en América hasta que llegó Colón.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Nosotros estamos en contra de la forma en que se enseña la historia en la escuela común.

**Sr. de la Rúa.** — Está bien: haremos la reforma educativa y esto es un atisbo del debate que vamos a hacer. Pero estamos aclarando el sentido del texto.

De cualquier modo, es una noticia acerca de quiénes habitaban estas tierras y la distribución de las tribus indígenas. Después se pasa rápidamente al descubrimiento de América, la colonización, la conquista y se arranca con la historia argentina. Pero lo que aquí se quiere subrayar es otra cosa: que conociendo su propia historia, nuestros aborígenes puedan sentir el orgullo de su propia raza, conocer quiénes fueron sus antepasados, lo que significaron las obras que ellos hicieron y dejaron.

He tenido la oportunidad de observar la actitud de otros pueblos sobre el particular. Por ejemplo, los mexicanos hacen un verdadero culto del estudio de la historia aborígen y el indígena mexicano se siente orgulloso de sus ancestros. Su pasado no comienza con la colonización sino que se remonta a las grandes civilizaciones que los precedieron. De lo que aquí se trata es de impartir una educación que ponga el acento en esta raíz sin negar, sin ignorar lo que signifi-

ca la historia argentina, que para todo el pueblo de la Nación es una síntesis que viene del pasado y se proyecta a lo futuro.

Pero así como a un niño que va a una escuela privada italiana le hablan sobre Garibaldi y sobre Vittorio Emmanuele o al que concurre a un colegio religioso lo instruyen acerca del pueblo del que viene, es necesario que nuestro indígenas tengan en la escuela oficial acceso al conocimiento de la historia de sus antepasados, de modo que sientan que son parte de nuestro pueblo, del pueblo argentino, que vienen de una raza de la que pueden sentirse orgullosos, que ha realizado hechos importantes y que forma parte de nuestra tradición, de nuestra historia y de nuestra cultura.

Por estos motivos insistimos en el texto tal como está redactado, recogiendo desde luego el valor de las observaciones formuladas. Entonces, corresponde señor presidente, que se vote, porque lamentablemente ésta no es la ocasión para realizar un debate más amplio, sino que debemos avanzar en este concepto que tiene un sentido constructivo para todos los señores senadores que han opinado acerca de la cuestión. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Corrientes.

**Sr. Leconte.** — Señor presidente: entiendo que en este debate coinciden dos posiciones que no son antagónicas. Creo que está en el ánimo de todos los señores senadores afirmar la historia argentina, la historia común, la de la patria de todos, que está por encima de cualquier sectarismo e intransigencia de grupo. Pero al mismo tiempo quiere brindárseles a estas comunidades que preservan en nuestra tierra las costumbres, el lenguaje y las prácticas de los pueblos que nos precedieron, la oportunidad de adentrarse en el conocimiento de su historia, porque están integradas a nuestro país, respetan nuestra bandera, cantan nuestro Himno, sirven a nuestra patria y han muerto por ella.

Tratando de conciliar estas posiciones propongo la siguiente redacción para el párrafo final, motivo de esta controversia: "se promoverá la difusión de la historia argentina con los matices propios de las comunidades aborígenes y la práctica del cooperativismo".

En esta forma queda como común denominador la historia argentina y se respetan algunos matices especiales propios de las culturas de esas comunidades que queremos preservar y se contempla el tema del cooperativismo, que está fuera de toda discusión.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. Bittel.** — He escuchado con detenimiento el debate y entiendo que hubiéramos podido evitarlo, porque estamos girando alrededor de una intención dirigida a educar a la comunidad aborígen. Pero partimos de un equívoco porque, según mi criterio, la educación común en la República no ha tendido hacia la discriminación racial sino a la integración de la comunidad argentina.

Durante el transcurso de este debate recordé que alguna vez se planteó la disyuntiva con respecto a la enseñanza religiosa. Quienes no eran católicos tenían que retirarse del aula cuando se predicaba el credo católico. A las escuelas van los hijos de todos los habitantes de nuestro país y, naturalmente, también los hijos de nuestros aborígenes comparten las aulas con quienes no lo son. Pareciera que nosotros pretendemos crear una escuela para los aborígenes, diferenciada de las que existen, concepto que según mi opinión constituye un gravísimo error.

Por estos motivos sugiero que se adopte la alternativa ofrecida por el señor senador por Corrientes, porque lo que nosotros queremos es que la comunidad aborígen se integre totalmente a la sociedad argentina para que no exista más esa diferencia odiosa entre los indígenas y quienes no lo son. Todos tienen un origen común: los que nacieron en esta tierra y quienes vinieron de Europa a integrarse con la población autóctona. Considero que estas breves palabras ponen punto final a la discusión. Y los maestros que honran este recinto saben como yo que una de las actitudes que debe evitarse es la de la discriminación entre el alumnado.

Los alumnos que concurren a la escuela común argentina no pueden sufrir discriminaciones porque sean rubios o negros, aborígenes o no; es decir, la instrucción que se imparte tiene que ser común para unos y otros.

No acepto como adecuada la expresión de la enseñanza de la historia aborígen o poscolombina. Por ello, adhiero a la propuesta formulada por el señor senador Leconte, porque no se puede discriminar a los hijos, porque va a continuar hasta el fondo de la historia la discriminación entre aborígenes y no aborígenes. Nosotros tenemos que terminar con esa odiosa distinción que ha hecho que los aborígenes, por la incomprensión de los blancos —como ellos dicen—, siempre fueran relegados a situaciones de verdadera injusticia.

Por consiguiente, debemos terminar con esta discriminación haciendo mención a la enseñan-

za de la historia de nuestro país, que comprende tanto al período anterior como al posterior a la llegada de Colón.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Considero que el señor senador Leconte ha interpretado perfectamente la intención de ambas bancadas. Lo único que pretendemos es que se enseñe una sola historia, y que pueda hacérselo tanto a los hijos de los aborígenes como a nuestros propios hijos. Por eso hacemos referencia a historia argentina sin aditamentos, debiendo destacarse especialmente la participación del aborígen en esa historia.

Por lo expuesto, el bloque justicialista propone la siguiente redacción para el párrafo en discusión: "Se promoverá la difusión de la historia argentina, destacando la participación del aborígen en la misma, y la enseñanza y práctica del cooperativismo".

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Menem.** — Iba a proponer algo similar, dado que todos estamos animados por el mismo espíritu integracionista, y para evitar la prolongación de este debate y que tengamos que enfrentarnos en esta votación, cuando todos los artículos hasta aquí aprobados lo han sido por unanimidad.

Propongo una fórmula similar a las mencionadas por los señores senadores Leconte y Rodríguez Saá, pero destacando cierta diferenciación: "Se promoverá la difusión de la participación del aborígen en la historia argentina y la enseñanza y práctica del cooperativismo". De esta manera hacemos resaltar el matiz de la participación que tuvo el aborígen en la historia argentina. También sería una fórmula conciliatoria donde se aúnan las expresiones y los anhelos de ambas posiciones.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por La Rioja.

**Sr. Sánchez.** — Señor presidente: cuando hice referencia a que la historia argentina es integral, lo expresé con la convicción plena de dejar expresado que admiro y amo a las civilizaciones aborígenes anteriores a la llegada de los españoles a América.

Nadie puede hoy discutir a las civilizaciones azteca, maya o incaica, que tantas enseñanzas nos han legado y nos han mostrado cómo los seres humanos podemos trabajar en conjunto, para que el logro de ese esfuerzo sea repartido equitativamente, pues tenían una organización que apuntaba a enaltecer al ser humano.

Es decir que yo no estoy en contra de la enseñanza de la historia aborigen; estoy a favor porque es necesario desmenuzar esa historia y estudiarla exhaustivamente para que comprendamos el espíritu y el perfil de nación que tenemos.

Como dice el senador por el Chaco, es en la escuela donde tenemos que fusionarnos porque, como enseñó Joaquín V. González, en el banco de la escuela es donde aprendemos democracia; donde nadie es más ni nadie es menos, donde todos somos iguales y estamos formándonos para servir al país y a la comunidad.

Quería hacer esta aclaración, señor presidente, porque, como dije, admiro y amo a todas las civilizaciones precolombinas, que tantas enseñanzas han dejado y que han sido destruidas por el egoísmo y la ambición de los hombres.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Saadi.** — En nombre del bloque justicialista adhiero a la propuesta formulada por su miembro, el senador Rodríguez Saá.

**Sr. Presidente (Araujo).** — ¿La comisión acepta la modificación propuesta?

**Sr. de la Rúa.** — Señor presidente: voy a sugerir el siguiente texto: "Se enseñará la historia argentina y se promoverá el estudio de sus antecedentes aborígenes y la enseñanza y práctica del cooperativismo".

**Sr. Saadi.** — Aceptamos la modificación que propone el señor senador de la Rúa.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Por Secretaría se dará lectura al artículo 16, con las modificaciones propuestas.

**Sr. Secretario (Macris).** — (*Lee*):

Artículo 16. — En la enseñanza se deberá resguardar la tradición histórico cultural de cada comunidad indígena, sus juegos y deportes y el aprendizaje del cultivo de la tierra con el conocimiento de las técnicas modernas, procurando habilitar y mantener granjas o huertas escolares. Se enseñará la historia argentina y se promoverá el estudio de sus antecedentes aborígenes y la enseñanza y práctica del cooperativismo.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 17.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra la señora senadora por Mendoza.

**Sra. Malharro de Torres.** — Para ser coherente con lo que he sugerido al considerarse el artículo 14, propongo que el último párrafo diga

lo siguiente: "Los establecimientos comunes de todos los niveles a los que asistan alumnos aborígenes observarán respecto a éstos las previsiones precedentes".

**Sr. Presidente (Araujo).** — ¿La comisión acepta esa modificación?

**Sr. de la Rúa.** — Sí, señor presidente.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 17, con la modificación propuesta por la señora senadora por Mendoza.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Por Secretaría se dará lectura al artículo 18, con las modificaciones propuestas.

**Sr. Secretario (Macris).** — (*Lee*):

Artículo 18. — La autoridad de aplicación coordinará con los gobiernos de provincia la realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas, para la prevención y recuperación de la salud física y psíquica de sus miembros, creando unidades sanitarias móviles para la atención de las comunidades dispersas. Se promoverá la formación de personal especializado para el cumplimiento de la acción sanitaria en las zonas de radiación de las comunidades.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Como no hay quórum en el recinto, se llamará a los señores senadores para votar.

—Así se hace.

—Después de unos instantes:

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Araujo).** — En consideración el artículo 19.

**Sr. Secretario (Macris).** — No se han propuesto modificaciones al texto impreso.

**Sr. Almendra.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Almendra.** — Como la Comisión de Asistencia Social y Salud Pública no ha sido consultada, quiero señalar que entiendo que el articulado propuesto no contempla todos los aspectos sanitarios necesarios. Por lo tanto creo que se podrían evitar todos estos artículos, para no caer en la omisión de algunos aspectos de la salud y no introducir una diferenciación con el resto de la población. Nosotros entendemos que el problema de la salud es prioritario para todos los argentinos, y si queremos que estas comunidades aborígenes queden integradas realmente a lo que es el pueblo argentino, ellas deben tener las



mismas posibilidades e iguales condiciones de atención de su salud que los demás habitantes de la Nación.

Por lo tanto creo que esto se obviaría con un solo artículo que dijera que estas comunidades tendrán las mismas posibilidades de salud que los demás argentinos. De lo contrario, como hay aspectos que no están contemplados, se puede causar algún problema a la autoridad de aplicación de salud pública, ya sea en el orden nacional, provincial o comunal. En la forma propuesta simplificaríamos la norma y dejaríamos abierto el camino para que se dé a estas comunidades el mismo tipo de atención.

**Sr. de la Rúa.** — Creo que las atinadas observaciones del señor senador encontrarían respuesta adecuada si agregáramos que las comunidades tendrán derecho además a la misma asistencia médica que el resto de los habitantes. Esto está sobreentendido en el texto. Lo que se quiere reafirmar como instrumento de política sanitaria es el control periódico, la lucha contra las enfermedades endémicas y la realización de un catastro sanitario, ya que en ese aspecto la situación de las poblaciones indígenas es verdaderamente grave en cuanto a atenciones específicas y urgentes.

Es claro que todo esto se afirma sin perjuicio de todos los demás derechos y de la plena vigencia del derecho a la salud en igualdad con todos los demás habitantes. De ese modo habremos dejado claro el asunto. Pero aquí hay que entender una acción urgente porque algunas comunidades indígenas están padeciendo una situación sanitaria que requiere el trabajo eficaz de los poderes públicos. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Santa Cruz.

**Sr. Almendra.** — Si ésa es la intención de los autores del proyecto acepto el texto propuesto pero entonces obviaríamos este articulado. En las distintas provincias, aunque no haya comunidades indígenas, se sabe bien que hay consenso entre el partido gobernante y nosotros acerca de lo prioritario que es la atención de la salud.

Si es intención remarcar esta circunstancia, sugiero agregar en un solo artículo que "la autoridad sanitaria tomará urgentes medidas para solucionar cualquier tipo de problema de salud que hubiere". Pero de la forma en que está redactado hay cosas que se nos escapan. Creo que sería mejor agregar que en el ámbito especial de estas comunidades se arbitrarán todos los medios necesarios para la urgente atención de los casos.

Hay planes de salud en el orden nacional, provincial y comunal. Y no se contempla una serie de realizaciones propuestas por el gobierno. Se habla solamente de la atención ambulatoria o de una atención primaria, pero de ninguna forma de construcciones estables donde hay comunidades necesitadas de una efectiva y permanente asistencia médica todos los días y no en forma ambulante.

Comparto el criterio del señor senador de la Rúa, pero prefiero que todo quede englobado en un mismo artículo. El ministerio no va a actuar solamente por los enunciados de esta ley, sino atendiendo los diferentes planes de salud existentes, ya que es un tema prioritario en esta etapa de gobierno.

**Sr. Presidente (Araujo).** — ¿Acepta la modificación el señor senador por la Capital?

**Sr. de la Rúa.** — Me gustaría que el señor senador sugiriera un texto. Podríamos agregar: "Todo ello, sin perjuicio del pleno derecho a la salud y todas las demás medidas necesarias o útiles que, de acuerdo con el resto de los planes nacionales, implemente la autoridad de aplicación"

**Sr. Almendra.** — Sugiero el siguiente texto: "La autoridad de aplicación coordinará con la Secretaría de Salud Pública de la Nación y con los gobiernos de provincia la aplicación de todos sus programas de salud vigentes para el territorio nacional y realización de planes intensivos de salud para las comunidades indígenas si así fuera menester". Y seguiría todo lo demás.

**Sr. Bravo Herrera.** — Propongo que al final del artículo, como último párrafo se agregue: "Las medidas indicadas precedentemente lo serán sin perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades nacionales y provinciales con carácter general".

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. Bittel.** — Le pido a mi distinguido colega y compañero de bancada que acepte el agregado que propone el señor senador por Salta por el principio jurídico de que lo que abunda no falta. Los planes de salud no son exactamente iguales en todas las provincias. Evidentemente, algunos son generales, y aquí se pretende privilegiar planes especiales para las comunidades aborígenes, por cuanto a veces, por la distancia del medio en que viven, no se realizan estas acciones del Ministerio de Salud Pública de la provincia. Creo que no está de más que eso sea mencionado.

Entonces, yo propongo que al final del artículo 20 se incluya lo propuesto por el señor senador Bravo Herrera.

**Sr. Bravo Herrera.** — Es en el artículo 16.

**Sr. Bittel.** — No, estamos hablando de los planes de salud, de los artículos 18, 19, 20 y 21. El capítulo VI es el que corresponde a este tema.

Como dije antes, creo que es correcto que eso se mencione, compañero senador. ¿Para qué se van a sintetizar los cuatro artículos en uno solo?

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasesco.** — Estimo que aquí estamos tratando el tema de la cobertura total en lo que se refiere a la salud del aborigen. Entonces yo diría que, sin perjuicio de lo considerado en los artículos correspondientes al capítulo VI, relativo a planes de salud, se incluya algo muy sencillo: que todo lo indicado en este punto es sin perjuicio de lo dispuesto para todos los habitantes de la Nación Argentina. Aclaro esto porque parecería que estuviéramos legislando para una minoría, para extranjeros, y no es así. Es decir, sin perjuicio de todos los derechos que surgen de los planes generales, de la Constitución y de los derechos que tienen los aborígenes como hombres que habitan este suelo, también excepcionalmente se aplicarán estos artículos; de esta manera, quedarían cubiertos todos los aspectos referidos a salud. Por supuesto, también nos encontraremos con disposiciones provinciales, municipales y regionales en materia de salud, así como con las correspondientes a la Organización Mundial de la Salud.

Así, con ese agregado, otorgaríamos la suficiente amplitud para que el Poder Ejecutivo —sobre el que no tenemos derecho a dudar acerca de su concepción democrática y universal— aplique en las normas reglamentarias todas aquellas disposiciones que provengan de convenciones internacionales y de planes de salud.

Como dije, con ese agregado quedaría solucionado el problema, sin perjuicio de incorporar alguna palabra o expresión.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Bravo Herrera.** — Deseo mencionar, señor presidente, que la modificación que he propuesto recién debería ser agregada como último párrafo del artículo 21, es decir, cubriendo todo lo relacionado con los planes de salud.

**Sr. Bittel.** — Sería en el capítulo VI.

**Sr. Bravo Herrera.** — Entonces, donde termina la enunciación de los incisos se expresaría lo siguiente: "Las medidas indicadas precedente-

mente, lo serán sin perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades nacionales y provinciales con carácter general para todos los habitantes del país.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Advierto que se está tratando otro artículo. Cuando llegue el momento oportuno, se votará ese agregado.

Se va a votar el artículo 19.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 20.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Deseo sugerir un agregado. Entiendo que muchas de las comunidades indígenas sufren el flagelo del mal de Chagas, señor presidente. Entonces, sugiero como agregado a la última parte del artículo 20, después de "...a este efecto, la educación sanitaria de sus integrantes...", lo siguiente: "...y el acceso a una vivienda digna". (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por La Pampa.

**Sr. Berhongaray.** — Con respecto al tema de la vivienda pensaba que después del tratamiento del articulado de este proyecto podríamos considerar el agregado de un título especial como capítulo VIII: "De los planes de vivienda". En este sentido, pensaba incorporar como artículo 24 el siguiente texto: "Los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley podrán solicitar ser incorporados a las operatorias para la construcción de viviendas del Banco Hipotecario Nacional, del Fondo Nacional de la Vivienda y de cualquier otro plan habitacional de fomento".

Deseo aclarar en esta instancia los fundamentos de este agregado que propicio. Estos planes de vivienda no están previstos para las zonas rurales sino que son planes para viviendas urbanas, con lo cual se crea una discriminación que, en el caso particular de los aborígenes, es doblemente grave. Por otra parte, en el artículo 9º, cuando hablamos de los créditos preferenciales para los adjudicatarios, señalamos la posibilidad de que se destinen a construcciones, pero no hablamos expresamente de viviendas; las construcciones pueden ser galpones o cualquier otro tipo de mejoras no dedicadas al uso habitacional.

La importancia que tiene el incorporar a los aborígenes a las operatorias del FONAVI, del Banco Hipotecario o de cualquier otro sistema de viviendas, hace conveniente tratar esta cuestión en un capítulo separado. Insisto: esto significa modificar los actuales sistemas del FONAVI

y del Banco Hipotecario, que no están previstos para planes de vivienda en zonas rurales. Creo que es una grave omisión. Este es el momento de salvarla para evitar la dependencia de créditos preferenciales que a lo mejor no tienen cartera. No existen los redescuentos ni hay fondos adecuados, y si tenemos en cuenta que quizás construyamos más de cien mil viviendas por año, de acuerdo con los planes previstos para zonas urbanas, podemos impedir —por una omisión seguramente no querida— que las familias aborígenes se incorporen a estos planes habitacionales. Por ello le solicito respetuosamente al señor senador por San Luis que tratemos más tarde la modificación que ha propuesto, en un capítulo especial. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Bittel.** — Considero correcta la observación del señor senador por La Pampa, pero quiero aclarar algo. El senador por Formosa, don Rogelio Nieves, precisamente, presentó en la sesión anterior un proyecto que tiende a suplir esa grave deficiencia de la legislación argentina. En él se establece que un porcentaje de los fondos del FONAVI se destine a la construcción de viviendas rurales. De cualquier manera, señor senador, creo que es atinado lo que usted propone, es decir, que se inserte un artículo que contemple la posibilidad de que las comunidades adjudicatarias de estas tierras, a las que esta ley hará acreedoras, accedan al crédito para construir sus viviendas. Así se habrá cumplido la aspiración de nuestro colega, el señor senador por San Luis, de viviendas dignas, para evitar que las vinchucas constituyan un peligro para la salud de nuestros aborígenes. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente** (Araujo). — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Solicité que se agregue al capítulo de salud el acceso a una vivienda digna porque al describirse la forma de combatir las enfermedades se habla de campañas de eliminación de insectos, y la única forma de eliminar la vinchuca es asegurando una vivienda digna. Por otra parte, la salud no comprende solamente el tratamiento de una enfermedad sino la plenitud espiritual y moral de la persona, que se logra también con una vivienda digna.

Por ello, y si no es incompatible con la posición del señor senador Berhongaray, solicito que se incluya en el capítulo de salud el acceso a una vivienda digna como un derecho de los aborígenes, y que se contemple esta posibilidad para combatir ese tipo de enfermedad. Sin perjuicio de ello, como una política socio-económica a favor del aborigen, se podría agregar el artículo 24, que desde ya anticipo

que votaremos afirmativamente. De esta manera se incluirían las dos posibilidades. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Berhongaray.** — Por mi parte, acepto la propuesta del señor senador.

**Sr. de la Rúa.** — La comisión acepta la modificación y sugiere que este capítulo VI se titule “De los planes de salud y vivienda”, incorporándose como artículo 22 lo propuesto por el señor senador Berhongaray.

**Sr. Berhongaray.** — Yo me había referido a un capítulo aparte.

**Sr. de la Rúa.** — Pero el derecho a la vivienda figura aquí; de esta manera no quedarían separados.

Como dije, la comisión acepta la modificación propuesta al artículo 20; luego veremos lo del título.

**Sr. Presidente** (Araujo). — Se va a votar el artículo 20 con la modificación propuesta por el señor senador por San Luis.

**Sr. Almendra.** — Solicito que se dé lectura al artículo 21 tal como quedaría redactado.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Estamos votando el artículo 20.

**Sr. Presidente** (Araujo). — Se va a votar el artículo 20, con la modificación propuesta.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 21.

**Sr. Bravo Herrera.** — Deseo hacer dos observaciones. En primer lugar, solicito que se suprima la palabra “binomio” del inciso d), quedando redactado de la siguiente manera: “El cuidado especial del embarazo y parto y la atención de la madre y del niño”. Fundo este pedido en que, de acuerdo con el diccionario, la palabra “binomio” significa textualmente: “Expresión compuesta de dos términos algebraicos separados por los signos más o menos”. (*Risas.*)

En segundo lugar, señor presidente, pido que se agregue como último párrafo de este artículo la frase que había señalado antes y que quedaría de la siguiente forma: “Las medidas indicadas precedentemente lo serán sin perjuicio de la aplicación de los planes sanitarios dictados por las autoridades nacionales, provinciales y municipales, con carácter general para todos los habitantes del país”.

**Sr. Berhongaray.** — Respetuosamente, le solicito al señor senador por Salta que cambie “precedentemente” por “en este capítulo”, por cuanto la palabra “precedentemente” puede

aludir solamente a ese artículo y nos estamos refiriendo a todos los artículos del capítulo.

**Sr. Bravo Herrera.** — Acepto, señor senador.

**Sr. de la Rúa.** — La Comisión acepta las propuestas formuladas. Sólo le aclaro que esta expresión "binomio madre-niño" es de uso común y habitual en los planes de pediatría y de atención materno infantil, aunque literalmente signifique lo que usted ha dicho, señor senador. Pero acepto la corrección para que a través de este proyecto mejoremos nuestra gramática. *(Risas.)*

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 21 con las modificaciones propuestas por el señor senador por Salta.

—La votación resulta afirmativa.

—Se lee el artículo 22.

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: yo había propuesto incluir en un capítulo aparte el tema de la vivienda. Ahora se hizo la sugerencia de incorporarlo en este capítulo.

**Sr. Rodríguez Saá.** — En el capítulo VIII.

**Sr. Berhongaray.** — Lo dejamos, entonces, para el capítulo VIII.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Señor presidente: hemos tenido la suerte de discutir esta noche un proyecto que, por iniciativa de los señores senadores León y de la Rúa, reivindica a los hermanos aborígenes argentinos.

Si bien es cierto que nosotros observamos que a través del debate se ha mejorado este proyecto, también es verdad que nos gustaría que los compañeros aborígenes estuvieran incluidos en la legislación previsional que tiene nuestro país. En este sentido, sugeriría que el artículo 22 simplemente dijera que se verificará el goce del beneficio previsional.

Nosotros no tenemos que inventar nada: ya está todo hecho dentro de nuestro sistema previsional. Sólo falta incorporar a estos compañeros, simplemente. En otras palabras, tenemos que encontrar la forma de verificar que los aborígenes gocen de los beneficios jubilatorios.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasesco.** — Señor presidente: en el artículo 22 deberíamos contemplar una situación especial.

Sabemos que de acuerdo con nuestra legislación tenemos un problema entre el reconocimiento del servicio y los aportes. También sabemos que la población indígena constituye el

grupo de argentinos más expoliados y saqueados, y en eso tal vez nosotros tengamos nuestra cuota de culpa. Son hombres que no van a poder, al llegar a los cincuenta, sesenta o sesenta y cinco años, acreditar los servicios y presentar una constancia, ya que sus patrones, que fueron los esclavistas que no han sido penados por la ley argentina, no les habrán dado un certificado de sus aportes. Son hombres que trabajaron toda la vida, de una manera u otra, en un "ghetto" de explotación y que, en consecuencia, no pueden probar sus aportes. *(Aplausos en las galerías.)*

Por esa razón creo que el indígena merece también una reivindicación histórica en el aspecto previsional. Sé que todos coincidimos en esto, porque no es una cuestión de partido sino de hijos de la misma tierra; es una cuestión de argentinos y sólo de argentinos.

Considero que es necesario incluir un artículo de excepción al régimen previsional argentino, de modo que cuando el aborigen no pueda acreditar sus servicios pueda hacerlo por información sumaria y si no está en condiciones de probar los aportes que sus patrones y expoliadores no concretaron en las cajas de previsión social, sea la de la Lotería y Beneficencia de la Nación la que los haga para que los indígenas puedan así jubilarse. *(Aplausos en las galerías.)*

Creo que nosotros tenemos el deber histórico de hacer esta reivindicación.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Señor senador: pero eso no está incluido en el proyecto.

**Sr. Brasesco.** — Estoy haciendo un planteo personal. No he hablado con mis amigos de bloque ni con ustedes, pero sé que todos coincidimos en la búsqueda de una solución al respecto.

Entonces yo no hago una proposición dogmática sino que propongo una hipótesis de trabajo para que resolvamos el problema del indígena que no ha podido realizar los aportes y que, de acuerdo con nuestra legislación, quedaría desamparado, cuando todos sabemos que de alguna forma trabajó.

Todos tenemos que tratar de encontrar la solución para que ese indígena de 55, 60 o 65 años de edad pueda acogerse al beneficio de la jubilación. Esto es así porque el Estado —que es la nación política y jurídicamente organizada— es responsable históricamente por haber desprotegido a un sector del país de la vigencia de sus derechos humanos.

Quienes durante los últimos años hemos levantado hermanados la bandera de los derechos humanos debemos buscar una solución para que

esos hombres puedan jubilarse y gozar con tranquilidad de su vejez en esta nueva etapa histórica argentina. Este es un anhelo que deseamos realizar tanto los peronistas, como los radicales, los hombres de centro y todos los demócratas. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Salta.

**Sr. Bravo Herrera.** — Señor presidente: este artículo es incompleto, porque, por ejemplo, cuando se refiere a las actividades no contempla a la industrial, o cuando hace alusión a la jubilación habla de la ordinaria y no de la extraordinaria.

Por estos motivos considero que debería incluirse en este artículo el siguiente párrafo: "Los aborígenes gozarán de los derechos de jubilación y pensión de acuerdo con una ley especial que se sancionará". Resultaría engorroso tratar ahora el caso especial de la jubilación y pensión de los indígenas.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Señor presidente: debemos tratar de unificar criterios. Comparto las expresiones de los señores senadores por Entre Ríos y por Salta. Pero quienes conocemos mejor a las comunidades aborígenes, porque hemos compartido algunas de sus vivencias, sabemos que la mayoría no podrá beneficiarse con esta legislación porque, lamentablemente, los aborígenes no llegan a los 55 o 60 años, debido a problemas de salud que ya hemos discutido.

Considero que no debe sancionarse una nueva ley acerca de este tema sino que debemos privilegiar a los compañeros indígenas determinando en esta ley una edad para su jubilación, que no puede ser la misma que contemplan las leyes previsionales.

**Sr. Brasesco.** — Comparto totalmente sus expresiones. Tratamos de encontrar una solución que sea beneficiosa para la comunidad. Considero que es conveniente, tal como lo señaló el señor senador por San Luis, fijar una edad determinada para la jubilación.

Quiero aclarar un concepto. Por la experiencia y los conocimientos que tengo, estimo que la población indígena, aun la que cuenta con 25 ó 30 años de edad, ha sido estafada en el 90 por ciento de los casos, porque no se han realizado los aportes correspondientes. Entonces, si los incluimos en la legislación previsional argentina vigente, ellos, que en este momento están ovacionando esta ley de reparación, no podrán acogerse al beneficio de la jubilación.

Por estos motivos le digo al señor senador Bittel, quien como su colega por el Chaco, doctor León, conoce los problemas indígenas, que deseamos que nuestros hermanos se jubilen; y aunque sepamos que no han realizado los aportes, que se los reconozcamos.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por el Chaco.

**Sr. Bittel.** — Este problema se resolvió en el Chaco en el año 1975 —y ruego me excusen por poner como ejemplo a mi provincia—, al sancionarse una ley relativa a jubilaciones rurales, que fue algo novedoso en nuestro país.

Esa disposición databa de 1955, y dio la casualidad de que en 1963 conversé sobre este tema con una persona que es muy grata al recuerdo de los radicales: Arturo Umberto Illia. Recuerdo que no encontramos una solución a este problema dentro de la mecánica de la legislación relativa a previsión social, porque los patrones no hacían los depósitos correspondientes, pues era demasiado engorroso, y la gente que trabajaba en la cosecha o carpía el algodón no deseaba que le efectuara los descuentos, porque había colonos tramposos que luego no los depositaban, todo lo cual iba en detrimento de los que querían cumplir con la ley. Entonces, como el trabajador al que le hacían los descuentos no estaba seguro de que se efectuaran los depósitos, este sistema no funcionó desde 1955 hasta 1975.

Recuerdo que el presidente Illia me dijo que seguramente esto no lo iban a entender los técnicos; que quizá lo entendiésemos él y yo, y que seríamos quienes le íbamos a dar solución. Pero lamentablemente el golpe de 1966 lo impidió.

La solución se logró a través del convenio de corresponsabilidad gremial, mediante el cual los colonos aportaron una determinada suma por cada tonelada de algodón entregado a las desmotadoras. Gracias a este convenio de corresponsabilidad gremial se pudieron jubilar en el Chaco muchos aborígenes y otras personas que no lo eran, que no se hubieran podido jubilar jamás. También se estableció una jubilación por edad avanzada, y contrariamente a lo citado por el compañero Oraldo Britos, en nuestra zona podemos exhibir aborígenes ancianos.

He presentado un proyecto que estimo va a ser tratado dentro de poco por este cuerpo, por el que se establece un sistema para solucionar este problema, porque el convenio de corresponsabilidad gremial fue denunciado por los desmotadores, pues en este país el hilo siempre se corta por lo más delgado.

Este convenio, que obligaba a las partes, permitía que una de ellas lo denunciara, hecho que ocurrió en 1979, oportunidad en que los desmo-

tadores denunciaron el citado convenio, motivo por el cual a partir de ese instante no se pudieron jubilar más personas.

Ello motivó que presentara un proyecto que recoge la experiencia del Chaco en esta materia, que confío va a ser considerado y sancionado dentro de poco tiempo, pues se trata de una disposición de estricta justicia. En ese proyecto se establece que las personas con 60 años de edad podrán acreditar los años trabajados mediante una información sumaria, porque es cierto lo apuntado por el señor senador Brasesco de que no van a tener justificados los servicios porque nunca les efectuaron los depósitos. Está también contemplada la situación de las personas con 65 años de edad, a las que no se les va a exigir que acrediten 15 años de trabajo sino solamente 10.

En consecuencia, para los aborígenes se tendrá que dictar una disposición similar, aunque indudablemente no se va a contar con los recursos que provienen de los productores algodoneros del Chaco, norte de Santa Fe, Corrientes y Formosa. Pero de cualquier manera, yo creo que la redacción del artículo 22 es muy escueta y tal vez nosotros deberíamos comprometernos a dictar una disposición que permita otorgar una jubilación a los aborígenes, permitiéndoles también que acrediten los servicios cumplidos mediante una información sumaria, pues si pretendemos que se jubilen acreditando depósitos en las cajas, no lo van a alcanzar nunca, porque con seguridad el 98 o 99 por ciento de los aborígenes —salvo escasas excepciones— no van a tener acreditados los servicios. Entonces, habrá que preparar una legislación especial privilegiada para hacer justicia con esta gente. De manera que entiendo que no vamos a solucionar el problema con este enunciado, porque no va a ser suficiente para que las respectivas cajas acuerden la jubilación al aborigen. Van a exigirle la acreditación de los servicios y ellos no podrán hacerlo.

Entonces, reformamos este artículo o nos comprometemos a dictar una ley especial que contemple la posibilidad de que los aborígenes puedan jubilarse u obtener la pensión correspondiente a través de la acreditación de servicios por medio de información sumaria, porque de otra manera no podrán hacerlo. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Rodríguez Saá.** — Habiendo escuchado la palabra de los señores senadores y recordando que hoy dijimos que debemos tratar de hacer las cosas bien, creo que ahora tenemos que dar la solución, habida cuenta de lo planteado correctamente por el señor senador Brasesco y otros señores senadores.

Entonces, propongo el siguiente texto que creo contempla todas las situaciones: "Los aborígenes dedicados a la explotación agropecuaria, forestal, industrial o minera gozarán de los derechos de jubilación ordinaria a la edad de 55 años, hayan o no realizado aportes a las cajas respectivas. La presente norma regirá hasta que sea dictada una ley especial que contemple a este sector social".

**Sr. Brasesco.** — Agregaría algo a lo que acaba de mencionar el senador por San Luis...

**Sr. Presidente (Araujo).** — Discúlpeme, señor senador Brasesco, pero el uso de la palabra fue concedido al señor senador por la Capital.

**Sr. de la Rúa.** — Quiero mencionar algo que se ha olvidado porque no conseguí hacer uso de la palabra en el momento oportuno.

Había anticipado una propuesta de redacción para este artículo que decía lo siguiente: "Los aborígenes dedicados a las actividades mencionadas en el artículo 10...", porque las que recién se mencionaron no constituyen una enunciación completa de las actividades que realizan.

Además, el artículo da el ámbito en el que se debe acordar el beneficio; es decir, a los aborígenes integrados a la comunidad y a las tareas que allí se desarrollan. Esa sería la condición para que tengan el derecho jubilatorio. El problema de los aportes es un tema diferente. La propia comunidad ya organizará la forma de hacerlo o deberemos buscar nosotros la solución a través de una ley especial.

Pero acá no estamos hablando de la jubilación para todo aborigen por el solo hecho de serlo, sino para aquellos que trabajan y viven en las tribus indígenas; ésa es la cuestión.

Por ejemplo, el cosechero del algodón puede ser un indígena, pero está haciendo una tarea fuera de la comunidad de su tribu. El que ejerce su profesión de abogado en Buenos Aires tampoco está trabajando integrado a su comunidad. Hay que mirar el ámbito en que se realiza la labor, a los efectos de reconocer la naturaleza del trabajo y el derecho de jubilación consiguiente.

Confieso que éste es uno de los artículos que más trabajo nos costó redactar. Es posible que aquí sea necesaria una ley especial; quisimos establecer el reconocimiento de un derecho que resulte de pertenecer a la comunidad o tribu para acceder a la jubilación o pensión. Buscamos una solución y por eso nos referimos a la ley de jubilación para los trabajadores rurales. Ese fue el sentido de nuestra preocupación.

Creo que una vez consagrado este derecho, deberemos avanzar después en la elaboración de leyes sobre materia previsional, que ya se están estudiando, de modo que podamos consagrar un derecho más amplio. Los señores senadores se han referido no sólo a la situación del aborigen que está en una comunidad, sino a todo trabajador explotado que vive en regiones alejadas del país, sometido por patronos que se aprovechan de su situación, lo cual merece ser protegido de otra manera, sean indígenas o no. Este es otro problema más vasto y complejo.

Tal vez para aportar una solución, convendría dar sanción al artículo 22 tal como lo he propuesto: "Los aborígenes dedicados a las actividades mencionadas en el artículo 10 gozarán de los derechos de jubilación o pensión, de acuerdo a la ley de jubilaciones para los trabajadores rurales". Creo que podríamos agregar este otro párrafo: "Sin perjuicio de los derechos que otras leyes les reconozcan", porque puede haber alguno que tenga jubilación por otra ley. Y sancionar así esta iniciativa y comprometernos a estudiar después un régimen particular.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasesco.** — Quiero aclarar un pequeño problema porque me parece que nos estamos embarullando. Nosotros estamos considerando una ley específica y especial. Por lo tanto, cuando nos referimos al indígena aludimos al que vive en comunidad. Por otra parte es importante aclarar que no estamos legislando para un sector ajeno a la vida nacional. En efecto, sin necesidad de esta ley los indígenas tienen derecho al sistema previsional argentino, así como lo tienen a votar y elegir autoridades, y están amparados por las leyes civiles. Pero hay circunstancias específicas que obligan, como lo han dicho el doctor de la Rúa y otros señores senadores, a considerar expresamente la situación del indígena que vive en comunidad. Por lo tanto, no corresponde hablar de que el indígena tiene derecho a jubilarse en la Caja de Trabajadores Rurales o en la del Personal del Estado, sino que estamos de acuerdo en que se trata de habitantes de la Argentina, nativos de esta tierra, con todos los derechos que como tales les corresponden.

Aquí estamos en presencia de una ley excepcional, semejante a la que considera la situación de la mujer o la del niño, es decir, un aspecto especial de la comunidad nacional. Estamos legislando sobre una situación anacrónica de la vida nacional.

Entonces, cuando hablamos del aspecto previsional y sin perjuicio de evitar improvisaciones en algo que es muy específico, creo que tendríamos que preguntarnos si puede hablarse del derecho a jubilarse con respecto a hombres que después van a ir a la Dirección Nacional de Recaudación Previsional y allí les van a decir que se vayan a sus casas porque no tienen hechos los aportes correspondientes.

Tendríamos que hallar, como dijeron los señores senadores Bittel y Rodríguez Saá, una norma que especificara dos circunstancias. En primer término, que los aborígenes en comunidad tienen derecho a la jubilación con declaración jurada de los servicios prestados; segundo, que los aportes los proveerá el Estado, si es que la patronal no puede hacerlo, y sin perjuicio de las acciones pertinentes contra quienes delinquieron y retuvieron esos aportes.

Aquí estamos hablando de un hecho concreto. Yo no discuto la técnica del artículo 22, sino que eso lo dejo a los juristas de la Cámara. Yo planteo un hecho real y concreto, porque de lo contrario vamos a hacer una simple declaración. Si el aborigen no puede acreditar los aportes se hará cargo el Estado. A tal efecto se dictará una ley especial sobre el problema.

De lo contrario, estaremos legislando sobre un hecho que no significará nada. Esto es lo que me preocupa.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Nosotros estamos totalmente de acuerdo en cuanto al ámbito de la aplicación de esta ley. Eso está fuera de discusión. Aquí se ha hablado de una situación de emergencia, de explotación, injusticia, enfermedad, de que los aborígenes no llegan a viejos porque son sometidos a enfermedades, persecuciones, explotaciones, esclavitudes.

Por ello es justo que se establezca una edad a la cual pueda gozarse del beneficio de la jubilación. Estimamos que esa edad es de cincuenta y cinco años, hasta que se dicte una ley especial.

Sin perjuicio de ello, se reconoce la imposibilidad que van a tener los compañeros aborígenes de acreditar los aportes, en razón de que las patronales malignas no los hicieron porque no pudieron o no quisieron. Creemos que es justo reparar esas injusticias estableciendo el derecho jubilatorio, haya aportes del aborigen o de la patronal, o no. El derecho jubilatorio les corresponde a los cincuenta y cinco años. Podríamos establecer esa norma esta misma noche, sin perjuicio de que rija hasta la sanción

de una ley especial. Pero si lo aprobamos, a partir de esta noche el aborigen que tiene cincuenta y cinco años puede ejercer su derecho y pedir la jubilación ordinaria y gozarla. (*Aplausos en las galerías.*)

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Compañero presidente: comparto plenamente lo que ha expresado nuestro colega. El artículo 22 les asigna el régimen de jubilaciones de los trabajadores rurales.

Nosotros queremos que se los exima de la presentación de la documentación en la que consta el aporte efectuado. Además, desde un principio hemos hablado de que ésta pretende ser una ley reparadora.

Por lo tanto avalo plenamente la propuesta hecha por mi colega Rodríguez Saá.

**Sr. Presidente (Araujo).** — ¿Acepta la comisión la modificación propuesta?

**Sr. de la Rúa.** — Comparto plenamente el espíritu que anima a la proposición que se hace. Pienso que es un asunto muy específico, casi una ley dentro de otra. Nosotros, que estamos legislando con responsabilidad en este tema, tendríamos que resolver esta cuestión de excepción, tal como se la ha planteado, con todos los informes del caso, viendo la posibilidad de ejecución y cumplimiento.

Creo que es en una ley especial que puede contemplarse esta situación.

Considero que debemos consagrar en este estatuto para las comunidades indígenas el derecho a la jubilación, que lo tienen por el hecho de pertenecer a esas comunidades y trabajar en ellas, dejando para una ley especial las condiciones de excepción que reconozcan la situación real y procuren una solución justa.

Se ha hablado de la edad de cincuenta y cinco años. Puede ser una ocurrencia arbitraria del momento, cuando esa edad podría ser de cincuenta o cincuenta y ocho años, menos o más, no lo sé. Es una cuestión que se determina de otro modo, de acuerdo con la buena técnica legislativa.

Pienso que, por el sentido de responsabilidad con que hemos venido elaborando esta ley, debemos dejar en este artículo 22 consagrada la esencia del estatuto, es decir, el derecho a jubilación de los integrantes de comunidades o tribus indígenas: "gozarán de ese derecho de acuerdo con las leyes". Oportunamente, dictaremos las normas especiales que modifiquen algunos de los requisitos. Me parece que de este modo obraremos con seriedad.

Los compatriotas indígenas no piden de nosotros dádivas, privilegios ni situaciones especiales, sino el reconocimiento de sus derechos y que se legisle sobre este tema con toda la seriedad del caso.

Pienso que, como hay un conjunto de proyectos en materia previsional, al examinarlos reunidos en un texto único —ya hemos conversado acerca de esta posibilidad en la Comisión de Trabajo—, encontraremos la manera de contemplar esta situación que, realmente, merece un reconocimiento. Por esto digo que si bien comparto en principio lo que aquí proponen los señores senadores, y seguramente llegaremos después a una solución, es nuestro deber convocar a los funcionarios del área respectiva para examinar las posibilidades reales y analizar el problema en su verdadera dimensión para encararlo seriamente, y no de este modo.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por San Luis.

**Sr. Britos.** — Quiero agregar lo siguiente, señor presidente. En un país como el nuestro, en donde estamos pagando el retiro efectivo y la pensión a cien mil hombres de las fuerzas armadas, tenemos otorgar este beneficio —que pretendemos sea reparador— a nuestros hermanos argentinos, los aborígenes; es de destacar que el número de ellos no debe llegar ni a tres mil, y todos sabemos que lo que perciban nunca llegará ni al básico de lo que gana cualquier hombre retirado de las fuerzas armadas; además, en el nuevo presupuesto se ha efectuado una quita a Defensa para dejar el porcentaje correspondiente otra vez en Seguridad Social y, en definitiva, eso lo pagará el pueblo.

No debemos temer ocupar esta noche para legislar en favor de estos hombres que están esperando en este Parlamento una respuesta válida. (*Aplausos en las galerías.*)

Por eso, señor presidente, solicito que se vote la propuesta sugerida por el compañero Rodríguez Saá.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Entre Ríos.

**Sr. Brasco.** — Quisiera hacer una pequeña digresión para ver si, entre todos, logramos una conciliación para la concreción de un artículo.

Aquí hay un detalle muy importante. En nuestro país tenemos regímenes jubilatorios vinculados con las actividades insalubres y peligrosas, que corresponden a un régimen excepcional. De acuerdo con lo que votamos en este proyecto, indudablemente el indígena, en comunidad, no puede encontrarse en un escalón inferior al de aquellos que se someten a un sistema de insalu-



bridad o peligrosidad en el trabajo. Yo diría que podríamos redactar el artículo 22 sin pecar de improvisadores y de temerarios respecto de un régimen previsional vinculado con una ley de excepción en la cual los aborígenes dedicados a la explotación agropecuaria, forestal, minera o artesanal gozarían de todos los derechos previsionales argentinos en todas sus variantes, fijándose para la jubilación ordinaria la edad que determinan los regímenes específicos para actividades insalubres y peligrosas en base a la declaración jurada de sus servicios y a que su régimen específico será determinado por una ley especial.

Entonces, nosotros dejaríamos determinada claramente la problemática de los aportes, la edad vinculada al régimen específico de la insalubridad y de la peligrosidad en regímenes especiales de jubilación y, al mismo tiempo, la declaración jurada. De esta manera, habría una legislación clara y concreta, pero fijando de antemano las pautas determinantes.

**Sr. Presidente (Araujo).** — ¿La comisión acepta la modificación?

**Sr. de la Rúa.** — La comisión acepta la modificación propuesta por el señor senador Brasesco.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Saadi.** — Señor presidente: el bloque justicialista apoya la propuesta formulada por el señor senador Rodríguez Saá. Entiendo que estamos tratando de reparar una situación injusta en sus más diversos aspectos, y que si dejamos sin resolver la situación actual, supeditándola a una ley que puede dictarse o no, no vamos a terminar con el problema. Insistimos entonces en la propuesta formulada por el señor senador Rodríguez Saá, que el bloque justicialista sostendrá en la votación. *(Aplausos en las galerías.)*

**Sr. Brasesco.** — Señor presidente: quisiera que el señor senador concrete su propuesta.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se votará en primer lugar la redacción aceptada por la comisión. Sígase el señor senador por Entre Ríos hacernos llegar la redacción del artículo de la comisión, con su propuesta.

**Sr. Brasesco.** — *(Lee):* “Los aborígenes dedicados a la explotación agropecuaria, forestal o minera comprendidos en la presente ley gozarán de todos los derechos del sistema previsional argentino, sin perjuicio de que para el caso específico de esta ley se encontraran, en lo que hace a edad, dentro de lo que determina la jubilación por actividad riesgosa o insalubre, permitiéndoseles el reconocimiento de los servicios por declaración jurada, y en el hipotético caso

de que sus empleadores no hayan acreditado los aportes pertinentes será el Estado quien se hará cargo de los mismos. Todo ello será específicamente determinado por una ley especial a tal efecto”.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 22, tal como acaba de ser leído y como dictamen de comisión.

**Sr. Saadi.** — ¿Por qué como dictamen de comisión?

**Sr. Presidente (Araujo).** — Porque el miembro informante ha propuesto la modificación.

**Sr. Saadi.** — Anunciamos entonces nuestro voto en contra.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar.

—La votación resulta negativa.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 22 con la redacción que propone el señor senador por San Luis, a quien solicito le dé lectura.

**Sr. Rodríguez Saá.** — *(Lee):* “Los aborígenes pertenecientes a comunidades o tribus gozarán de los derechos de jubilación ordinaria a la edad de 55 años, hayan o no realizado aportes. La presente norma regirá hasta que sea dictada una ley especial que contemple a este sector social”.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 22 con la modificación propuesta por el señor senador por San Luis.

—La votación resulta afirmativa. *(Aplausos en las galerías.)*

**Sr. Berhongaray.** — Señor presidente: antes de tratar el artículo 23, que se refiere a los gastos que demande el cumplimiento de la presente ley, solicito la incorporación de un capítulo VIII, titulado “De los planes de vivienda”. Se compondría de un artículo 23, con el siguiente texto: “Los titulares de las tierras adjudicadas por esta ley podrán solicitar ser incorporados a las operatorias para la construcción de viviendas del Banco Hipotecario Nacional, del Fondo Nacional de la Vivienda (FONAVI) y de cualquier otro plan habitacional de fomento”. Los fundamentos los expresé cuando tratamos el artículo 20 y a ellos me remito.

**Sr. Rodríguez Saá.** — Nosotros adherimos absolutamente a este artículo. Pedimos simplemente al senador Berhongaray que lo titulemos “Capítulo VIII: De los derechos sociales”. Luego seguiría el artículo 23.

**Sr. Berhongaray.** — En otros capítulos también nos hemos referido a derechos sociales al

tratar la salud, la educación y los derechos previsionales. Creo que todos son derechos sociales y que éste, el derecho a la vivienda, es uno más, por supuesto.

**Sr. Brasesco.** — Es un aspecto particular de los derechos sociales.

—Varios señores senadores hablan simultáneamente.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Ruego a los señores senadores que no dialoguen.

Si no se hace uso de la palabra se va a votar el artículo 23, tal como ha sido leído por el señor senador por La Pampa.

—La votación resulta afirmativa (*Aplausos en las galerías.*)

—Se lee el artículo 23 del dictamen, que pasa a ser 24.

**Sr. de la Rúa.** — Pido que se agregue: "Capítulo IX: De los recursos", que comprendería a este artículo.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar el artículo 24 con la modificación que propone el señor senador por la Capital.

—La votación resulta afirmativa.

—El artículo 24, que pasa a ser 25, es de forma.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Queda sancionado el proyecto de ley<sup>1</sup>. Se comunicará a la Honorable Cámara de Diputados. (*Aplausos en las bancas y en las galerías.*)

## 11

### PEDIDO DE PRONTO DESPACHO

**Sr. Velázquez.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Misiones.

**Sr. Velázquez.** — Señor presidente, señores senadores: creo que con el proyecto que acabamos de sancionar comienza una justa reivindicación de nuestros aborígenes. En reiteradas oportunidades se dijo hoy aquí que debíamos tomar todos los recaudos necesarios para garantizar que ellos fuesen considerados igual que cualquier ciudadano argentino.

Por este motivo, quiero requerir de este alto cuerpo el compromiso del pronto despacho de un proyecto de ley que apunta también a la reivindicación de los aborígenes como ciudadanos de la Nación Argentina que son. Se trata de un proyecto que se encuentra en la Comisión

de Legislación General y que propicia la modificación de la ley 18.248, con el siguiente agregado: "Asimismo podrán inscribirse nombres aborígenes o derivados de voces aborígenes autóctonas y latinoamericanas". Como ustedes sabrán, señores senadores, nuestros indígenas no pueden anotarse con su nombre de origen. (*Aplausos en las galerías.*)

## 12

### MOCIONES DE PREFERENCIA Y CUARTO INTERMEDIO

**Sr. Saadi.** — Pido la palabra.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Tiene la palabra el señor senador por Catamarca.

**Sr. Saadi.** — Señor presidente: hago moción para que se pase a cuarto intermedio hasta mañana a las 18.

**Sr. Presidente (Araujo).** — En consideración la moción formulada por el señor senador por Catamarca.

Tiene la palabra el señor senador por Río Negro.

**Sr. Nápoli.** — Señor presidente: sin perjuicio de apoyar la moción de cuarto intermedio formulada por el señor senador Saadi, quiero manifestar que durante la lectura de los asuntos entrados se me pasó un tema sobre el cual deseaba hacer una petición: se trata del proyecto de ley de defensa de la democracia y protección del orden constitucional. Solicito que ese proyecto sea tratado en la reunión del día de mañana, con despacho de comisión o sin él.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Si no se hace uso de la palabra, se va a votar, en primer término, la moción de preferencia formulada por el señor senador por Río Negro.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Se va a votar la moción de cuarto intermedio formulada por el señor senador por Catamarca.

—La votación resulta afirmativa.

**Sr. Presidente (Araujo).** — Señores senadores: la Presidencia les sugiere que conserven los órdenes del día, porque los ejemplares se han agotado.

Invito a los señores senadores a pasar a cuarto intermedio hasta las 18 del jueves 9 de agosto.

—Es la 0 y 41 del jueves 9 de agosto de 1984.

MARIO A. BALLESTER.  
Director del Cuerpo de Taquígrafos.

<sup>1</sup> Ver el Apéndice.